



ifs25

Índice
de Finanzas
Sostenibles 2025
(datos a 2024)

**Finanzas Sostenibles
y transiciones justas:**
avances y retrocesos hacia economías
bajas en carbono y resilientes al clima
en América Latina y el Caribe



**Finanzas
Sostenibles
para el Futuro**



**Índice
de Finanzas
Sostenibles**



**Hub
de Finanzas
Sostenibles**



**Diálogos
sobre Clima
y Finanzas
Sostenibles**



Esta publicación está licenciada bajo la Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional. No es una licencia de Cultura Libre.

Cita requerida:

Los lectores pueden reproducir total o parcialmente este documento siempre que se cite la fuente de la siguiente manera:
Grupo de Financiamiento Climático para América Latina y el Caribe (GFLAC) (2025). Índice de Finanzas Sostenibles 2025 (con datos a 2024). *Finanzas sostenibles y transiciones justas: avances y retrocesos hacia economías bajas en carbono y resilientes al clima en América Latina y el Caribe*. Grupo de Financiamiento Climático para América Latina y el Caribe (GFLAC).

Autores:

Dra. Sandra Guzmán

Fundadora y Directora General, GFLAC

Mtro. Orlando Barbosa

Asociado en Finanzas Climáticas Públicas, GFLAC

Mtro. Diego Escalante

Asociado en Finanzas Públicas para América del Sur, GFLAC

Lic. Luz Andina Parrado

Asociada en Creación y Fortalecimiento de Capacidades, GFLAC

Estrategia de comunicación y diseño:

Lic. Federika Logwinczuk

Asociada de Comunicación Estratégica Institucional, GFLAC

Lic. Jhon Cortés

Asociado Senior en Diseño Creativo, GFLAC



Agradecimientos

Los informes anuales del Índice de Finanzas Sostenibles constituyen una herramienta esencial para comprender cómo se materializan las decisiones de política presupuestaria en los países de la región y para evaluar la relevancia que adquieren las acciones climáticas en sus agendas nacionales. Para el Grupo de Financiamiento Climático para América Latina y el Caribe (GFLAC), este ejercicio implica fortalecer continuamente sus capacidades frente a nuevos desafíos de acceso a información, exigencias metodológicas y decisiones estratégicas que inciden en los resultados. Todo ello con el propósito de promover la transparencia, elevar la calidad del debate público y generar recomendaciones de política que contribuyan al cumplimiento del Acuerdo de París.

La elaboración del Índice de Finanzas Sostenibles (IFS) es posible gracias a un equipo interdisciplinario comprometido, capaz de enfrentar la complejidad técnica, política y operativa que demanda este esfuerzo regional. En este sentido, expresamos nuestro profundo reconocimiento al equipo de GFLAC, cuya dedicación, conocimiento y sensibilidad política hicieron posible la edición del IFS 2025. Su trabajo permitió consolidar metodologías más sólidas, ampliar la base de información disponible e impulsar innovaciones clave para robustecer la arquitectura del índice.

Extendemos también un agradecimiento especial a los gobiernos que participaron activamente en este proceso, proporcionando información indispensable para la elaboración del IFS 2025 y demostrando su compromiso con la transparencia y con la construcción de sistemas fiscales más alineados con la acción climática. Reconocemos particularmente a:

- **Argentina:** Vicejefatura de Gabinete de Interior; Dirección de Información y Datos Públicos.
- **Brasil:** Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima; Ministério do Planejamento e Orçamento.
- **Chile:** Ministerio de Agricultura; Ministerio del Medio Ambiente; Dirección de Presupuestos; Portal de Transparencia.
- **Colombia:** Ministerio de Hacienda y Crédito Público; Ministerio de Minas y Energía.
- **El Salvador:** Ministerio de Economía.
- **Guatemala:** Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
- **México:** Secretaría de Hacienda y Crédito Público; Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
- **Perú:** Ministerio del Ambiente.
- **Paraguay:** Ministerio de Economía y Finanzas.
- **República Dominicana:** Ministerio de Energía y Minas.
- **Uruguay:** Ministerio de Economía y Finanzas.

Agradecemos igualmente a aquellos gobiernos que, aun sin compartir información de manera directa, manifestaron interés en dialogar sobre los resultados del IFS. La información pública independiente disponible también enriqueció el análisis y aportó elementos valiosos para profundizar la reflexión sobre el financiamiento climático y sus implicaciones en la gestión pública.

Reconocemos, además, la colaboración de aliadas y aliados que, mediante su interés, observaciones y reflexiones, han contribuido a fortalecer la metodología del IFS y sus resultados a lo largo de los años. Su participación ha sido fundamental para consolidar este instrumento como una referencia en el análisis fiscal climático en América Latina y el Caribe. Finalmente, expresamos nuestra sincera gratitud a las instituciones filantrópicas que continúan confiando en el trabajo de GFLAC y que hacen posible la continuidad, profundización e innovación en la generación de conocimiento sobre finanzas climáticas en la región.

Esperamos que los resultados de este informe, y de los que elaboramos año con año, contribuyan de manera significativa a transformar la arquitectura financiera, orientar las decisiones públicas hacia la sostenibilidad y acelerar las acciones indispensables para enfrentar la crisis climática global.

Dra. Sandra Guzmán
Fundadora y Directora General, GFLAC



Tabla de contenido

Introducción	8
Principales resultados del Índice de Finanzas Sostenibles 2025 (con datos a 2024)	11
1. Índice de Finanzas Sostenibles	15
1.1 Metodología del Índice de Finanzas Sostenibles	15
1.2 Estimación del Índice de Finanzas Sostenibles	18
2. Implementación del Índice de Finanzas Sostenibles	19
2.1 Análisis de las variables cualitativas	19
2.2 Análisis de las variables cuantitativas	29
2.3 Análisis comparativo de las variables del Índice de Finanzas Sostenibles	47
3. Análisis histórico del Índice de Finanzas Sostenibles	53
4. Conclusiones y Recomendaciones	63
4.1 Conclusiones	63
4.2 Recomendaciones	64
5. Fuentes de información	67
5.1 Fuentes de información general	67
5.2 Fuentes de información de finanzas públicas por país	68


Contenido de ilustraciones

Índice de tablas

Tabla 1. Variables cuantitativas del IFS	17
Tabla 2. Ejemplo hipotético de la estimación del Índice de Finanzas Sostenibles	18
Tabla 3. Desagregación de los componentes de la variable de ingresos sostenibles por país, monto en dólares (2023).	35
Tabla 4. Ingresos públicos destinados a la variable de ingresos intensivos en carbono en dólares en 2024	38
Tabla 5. Presupuesto asignado a los sectores que integran la variable de Presupuestos Sostenibles, en dólares (2024).	43
Tabla 6. Presupuesto destinado a la variable de Presupuestos Intensivos en Carbono, en dólares (2024)	46
Tabla 7. Participación porcentual de Ingresos Sostenibles, 2019 - 2024	55
Tabla 8. Participación porcentual de Ingresos Intensivos en Carbono, 2019 - 2024	57
Tabla 9. Participación porcentual de Presupuestos Sostenibles, 2019 - 2024	59
Tabla 10. Participación porcentual de Presupuestos Intensivos en Carbono, 2019 - 2024	60

Índice de gráficas

Gráfica 1. Tasa de agotamiento de los recursos naturales en 2021	21
Gráfica 2. Emisiones de GEI en MtCO ₂ e en 2022	22
Gráfica 3. Producto Interno Bruto en miles de millones de dólares en 2024	23
Gráfica 4. Comparación entre ingresos y egresos en miles de millones de dólares en 2024	24
Gráfica 5. Financiamiento internacional destinado a la biodiversidad y el cambio climático con respecto al total del financiamiento para el desarrollo en 2023	25
Gráfica 6. Distribución del financiamiento destinado a biodiversidad y cambio climático por tipo de instrumento: préstamos y subvenciones en porcentaje en 2023	26
Gráfica 7. Índice de Desarrollo Humano en los 20 países de estudio en 2023	28
Gráfica 8. Tasa de desempleo en los 20 países de estudio en 2024	29
Gráfica 9. Ranking de Finanzas Sostenibles 2025	30
Gráfica 10. Ranking de Ingresos Sostenibles 2025 (% del total) datos a 2023	33
Gráfica 11. Ranking de Ingresos Intensivos en Carbono 2025 (% del total) datos a 2024	36
Gráfica 12. Ranking de Presupuestos Sostenibles 2025 (% del total) datos a 2024	39
Gráfica 13. Ranking de Presupuestos Sostenibles 2025, considerando los nuevos sectores de conservación de océanos y transporte sostenible (% del total) datos a 2024	41
Gráfica 14. Ranking de Presupuestos Intensivos en Carbono 2025 (% del total) datos a 2024	44



Gráfica 15. Análisis regional: Ingresos Sostenibles (2023) versus Ingresos Intensivos en Carbono (2024). 48

Gráfica 16. Análisis comparativo: Presupuestos Sostenibles versus Presupuestos Intensivos en Carbono en 2024 49

Gráfica 17. Presupuestos Sostenibles versus presupuesto necesario estimado con respecto al 2% del PIB en 2024 51

Gráfica 18. Presupuestos Sostenibles versus presupuesto necesario estimado con respecto al 2% del PIB como porcentaje del presupuesto total para los 20 países de estudio en 2024 52

Gráfica 19. Análisis comparativo del Índice de Finanzas Sostenibles 53





Introducción


El mundo se encuentra en un punto de inflexión decisivo frente a la crisis climática y la pérdida acelerada de biodiversidad. Según el informe *Global Tipping Points 2025*, el planeta ha alcanzado umbrales ecológicos que podrían marcar un punto de no retorno de los sistemas climáticos y naturales. Estos hallazgos confirman la urgencia de transformar modelos de desarrollo actuales, que continúan impulsando actividades intensivas en carbono y presionan los límites planetarios. En este contexto, América Latina y el Caribe, una de las regiones más biodiversas del mundo, pero también altamente vulnerables a los impactos climáticos, enfrentan el desafío de redefinir su arquitectura financiera y fiscal para sostener un desarrollo verdaderamente sostenible y resiliente.

La **canalización de recursos financieros** hacia la acción climática y la protección de la biodiversidad no solo requiere **incrementar los montos disponibles**, sino también asegurar que dichos flujos sean de alta calidad, coherentes con los objetivos globales y plenamente transparentes. En la **COP30**, los países avanzaron en las negociaciones para definir un nuevo **paquete global de financiamiento** que integrará la **Hoja de Ruta de Bakú a Belem (B2B)**, la **Meta Global de Adaptación (GGA)** y la actualización de las **Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC)**. Estos procesos establecerán el marco financiero internacional para la próxima década, delineando los niveles de ambición y las obligaciones de apoyo para los países en desarrollo. Resulta prioritario fortalecer los sistemas de **trazabilidad, medición y rendición de cuentas**, de modo que cada dólar movilizado contribuya efectivamente a reducir emisiones, aumentar la resiliencia y proteger los ecosistemas, evitando duplicidades, distorsiones y financiamientos que no respondan a las prioridades nacionales o a los compromisos del **Acuerdo de París**.

En este escenario, el **Índice de Finanzas Sostenibles (IFS)** desarrollado por el **Grupo de Financiamiento Climático para Latinoamérica y el Caribe (GFLAC)**, se consolida como una herramienta técnica clave para **monitorear y evaluar los flujos financieros** orientados a la mitigación, adaptación, biodiversidad y otros componentes de la sostenibilidad. Su aplicación permite identificar patrones de asignación de recursos, medir el grado de dependencia de las economías nacionales respecto a fuentes intensivas en carbono y generar evidencia empírica para fortalecer la transparencia, la planeación fiscal y la coherencia de las políticas públicas.

El IFS no solo se alinea al mandato del **Artículo 2.1.c del Acuerdo de París** que llama a *“hacer coherentes los flujos financieros con una trayectoria hacia un desarrollo con bajas emisiones de gases de efecto invernadero y resilientes al clima”*, sino que también proporciona una base analítica robusta para evaluar el grado de alineación de los sistemas financieros nacionales con los compromisos climáticos. En el contexto posterior a la **COP30**, donde la implementación y rendición de cuentas serán determinantes, herramientas como el IFS adquieren un papel central para orientar decisiones basadas en evidencia, optimizar la asignación de recursos públicos y privados y acelerar la transición hacia economías bajas en carbono y resilientes al clima.

En su **edición 2025**, el IFS incorpora **nuevos componentes en la variable de presupuestos sostenibles**, incluyendo la **conservación de océanos y transporte sostenible**, ampliando así el alcance del análisis sobre los esfuerzos de los gobiernos nacionales para integrar la sostenibilidad en la gestión pública. Los resultados de esta edición muestran avances




moderados, aunque aún insuficientes: **los ingresos por actividades intensivas en carbono superan en 11 veces a los ingresos sostenibles**, y **los presupuestos destinados a sectores con alto impacto ambiental son 5 veces mayores que aquellos dirigidos a la acción climática**.

Si bien estas brechas muestran una ligera mejora con respecto a la edición 2024, reflejan la persistente dependencia estructural de la región respecto a economías basadas en combustibles fósiles. Este panorama reafirma la necesidad de **reorientar los flujos financieros públicos y privados hacia la sostenibilidad**, fortaleciendo la transparencia, la rendición de cuentas y la planificación basada en evidencia.

Los resultados del **IFS 2025 destacan a Panamá** como el país mejor posicionado, al **alcanzar 3.5 de un máximo de 4.0 puntos**, correspondiente al nivel de desempeño **“Muy Alto”**, debido a su alta captación de financiamiento internacional climático y su baja exposición a fuentes intensivas en carbono. En contraste, **Cuba y Trinidad y Tobago** se mantienen en el nivel **“Bajo”**. No obstante, un resultado relevante de esta edición es que ningún país se ubica en el nivel **“Muy Bajo”** de finanzas sostenibles.

El presente informe ofrece una visión integral sobre el estado de las finanzas sostenibles en los países de estudio de América Latina y el Caribe. Su contenido se organiza en cuatro capítulos principales que combinan el análisis metodológico, el diagnóstico empírico y la formulación de recomendaciones de política pública.

- **Capítulo 1. Índice de Finanzas Sostenibles (IFS).** Presenta el objetivo, alcance y estructura conceptual del IFS, así como la descripción detallada de los indicadores cualitativos y cuantitativos que lo conforman. También se expone la metodología empleada para su construcción, los criterios de evaluación y las fuentes de información consideradas, con el propósito de garantizar transparencia, rigurosidad técnica y claridad en la interpretación de los resultados.
- **Capítulo 2. Implementación del Índice de Finanzas Sostenibles.** Desarrolla los resultados derivados del análisis de los indicadores cualitativos y cuantitativos. Los primeros se organizan en cuatro dimensiones —ambiental, económica, financiera y social— que permiten comprender los factores estructurales e institucionales que condicionan la sostenibilidad fiscal a nivel nacional. Posteriormente, se presentan los resultados del índice y de sus variables con el fin de identificar patrones regionales, brechas entre países y áreas de oportunidad para fortalecer la alineación de las finanzas públicas con los objetivos climáticos y de desarrollo sostenible.
- **Capítulo 3. Análisis histórico del Índice de Finanzas Sostenibles.** Ofrece una revisión comparativa de las seis ediciones del índice y de cada una de sus variables, con el propósito de analizar tendencias, avances y retrocesos en la integración de la sostenibilidad en los sistemas fiscales y presupuestarios. Este análisis longitudinal permite comprender cómo han evolucionado los marcos de política pública, la disponibilidad presupuestaria, los patrones de inversión y los ingresos relacionados con actividades sostenibles e intensivas en carbono. Asimismo, permite identificar dinámicas persistentes, puntos de inflexión y áreas críticas que requieren transformaciones estructurales.
- **Capítulo 4. Conclusiones y recomendaciones.** Sintetiza los principales hallazgos y presenta un conjunto de propuestas orientadas a fortalecer las capacidades fiscales, presupuestarias e institucionales de los países de la región. Estas recomendaciones



se estructuran en cuatro áreas estratégicas —ingresos, presupuestos, planeación y transparencia— que constituyen pilares fundamentales para transitar hacia sistemas fiscales alineados con los compromisos climáticos internacionales y con una gestión responsable y eficiente de los recursos públicos.

En su conjunto, el informe busca destacar la importancia de transitar hacia una arquitectura fiscal que incorpore la sostenibilidad como eje central de las decisiones públicas. Reconoce que los desafíos climáticos y de biodiversidad demandan un replanteamiento profundo de los mecanismos mediante los cuales se generan, asignan y gestionan los recursos públicos.

El IFS se mantiene en un proceso continuo de perfeccionamiento metodológico orientado a fortalecer la calidad, consistencia y comparabilidad de la información. Sus resultados aspiran a servir como herramienta de apoyo para que los gobiernos nacionales consoliden finanzas públicas más sostenibles, transparentes y coherentes con sus compromisos climáticos. Para lograrlo, es indispensable ampliar la disponibilidad de información, fortalecer las capacidades institucionales de seguimiento y evaluación, e impulsar la colaboración intergubernamental y multisectorial que acelere la adopción de políticas transformadoras.

Para comentarios, consultas o propuestas de colaboración, puede contactarse al correo: [**finanzassostenibles@gflac.org**](mailto:finanzassostenibles@gflac.org).



Principales resultados del Índice de Finanzas Sostenibles 2025 (con datos a 2024)

Contexto regional

América Latina y el Caribe atraviesan un momento decisivo frente a la crisis interconectada del **cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la desigualdad estructural**. La región ha sido catalogada por el IPCC y el *Global Tipping Points 2025* como uno de los territorios más expuestos a los efectos de los puntos de inflexión climáticos, debido a su alta dependencia de los ecosistemas naturales, su vulnerabilidad social y su limitada resiliencia fiscal.

En los últimos años, los **eventos climáticos extremos** han aumentado en frecuencia e intensidad: entre 1998 y 2020, más de **312 millones de personas** en la región fueron afectadas por desastres asociados al clima - sequías prolongadas, huracanes, incendios forestales e inundaciones - generando pérdidas económicas estimadas anuales por desastres que ascienden a los 58 mil millones de dólares (OMM, 2021, UNDRR, 2025).


Paralelamente, la **pérdida de biodiversidad y la degradación de ecosistemas** se han acelerado: más del **55% de los ecosistemas terrestres y marinos** de la región muestran signos de alteración severa, con un retroceso de más del **40% de las poblaciones de especies vertebradas** en los últimos 50 años (CDB, 2019). Esta degradación amenaza directamente los medios de vida de las comunidades rurales e indígenas y compromete servicios ecosistémicos esenciales para la regulación climática.

El impacto humano de esta crisis se refleja también en el aumento de la **migración climática**. De acuerdo con el Banco Mundial (2021), si las tendencias actuales continúan, **más de 17 millones de personas** podrían verse forzadas a desplazarse internamente en América Latina y el Caribe hacia 2050 por razones relacionadas con el clima. Este fenómeno plantea desafíos en materia de gobernanza, infraestructura y cohesión social, especialmente en zonas urbanas vulnerables.

Asimismo, la región continúa mostrando una **alta vulnerabilidad económica** ante estos impactos. En 2022, América Latina y el Caribe generaron **4,101 millones de toneladas de CO₂ equivalente**, el **8.18% de las emisiones globales**, cifra modesta frente a regiones industrializadas pero significativas si se considera el alto nivel de exposición ambiental (ClimateWatch - Historial emissions GEI, 2025). A pesar de representar una fracción de las emisiones mundiales, la región concentra una proporción desmedida de los daños económicos y sociales derivados del cambio climático.

Económicamente, la región aportó en 2024 el **6.57% del PIB global**, con una tasa de crecimiento promedio de **1.4%**, inferior al promedio mundial (Banco Mundial, 2024). Esta desaceleración refleja **limitaciones estructurales persistentes**: baja diversificación productiva, alta informalidad laboral y escasa inversión en innovación sostenible. El **desempleo promedio (6.2%)** (Banco Mundial, 2024) y la elevada **informalidad** siguen afectando la estabilidad fiscal, mientras que el **6.4% de la población** permanece en situación de vulnerabilidad multidimensional (PNUD, 2024).

Estas condiciones evidencian que **América Latina y el Caribe no están financieramente preparadas para enfrentar las consecuencias del cambio climático**, lo que podría profundizar las brechas sociales, exacerbar la pobreza e incrementar la migración



climática. La falta de planeación fiscal y presupuestaria alineada a la acción climática limita la capacidad de los Estados para responder de manera preventiva y equitativa.

Financiamiento climático para la región de América Latina y el Caribe

En 2023, **América Latina y el Caribe recibió 17.9 mil millones de dólares en financiamiento climático y biodiversidad** de acuerdo con estimaciones de la GFLAC con base a fuentes de datos de la OCDE. Este monto significa un incremento importante de 65.03% con relación a datos de 2021, donde el financiamiento fue de 10.9 mil millones de dólares. Si bien estos datos son positivos para la edición de este año, una visión más desagregada muestra que todavía la distribución no es homogénea, otorgando menos recursos a ciertos objetivos de política climática. En el caso de **biodiversidad, la región recibió 817 millones de dólares**, lo que representa el **4.54% del financiamiento total**. Este es un monto significativamente bajo, con relación a otras variables de política climática, teniendo además en consideración la importancia en conservación de biodiversidad que debería darle a la región.


Para el caso de **adaptación, el monto total destinado fue de 5.3 millones de dólares**, lo que representa el **29.5%**. Mientras que, para el caso de **mitigación la región recibió 11.8 millones de dólares**, que representa el **65.8%**. Si bien, la mitigación es importante para reducir las emisiones de CO₂, aumentar los recursos en adaptación es fundamental porque la región de América Latina y el Caribe debe construir la capacidad de resiliencia y adaptar su estructura para hacerle frente a las adversidades del cambio climático.

Los bancos multilaterales (MDBs por sus siglas en inglés) representan una fuente importante de financiamiento. En el caso de América Latina y el Caribe, en 2023 **la región recibió 3.3 mil millones en cambio climático y biodiversidad** con base a estimaciones realizadas por la GFLAC y datos de la OCDE. De este financiamiento, se destinaron 2.3 mil millones en mitigación, mientras que 250 millones de dólares se destinaron a adaptación y 742 millones a biodiversidad. Las inversiones en adaptación se concentraron en energía, transporte e infraestructura, así como en recursos agrícolas y ecológicos. Por su parte, los fondos destinados a mitigación se enfocaron principalmente en el sector energético, edificaciones y eficiencia energética (African Development Bank, et al., 2024).

Respecto a los resultados del Índice de Finanzas Sostenibles 2025

Los resultados del **Índice de Finanzas Sostenibles (IFS) 2025** revelan que América Latina y el Caribe registran **avances moderados, pero todavía insuficientes en el saneamiento de sus finanzas públicas**. Aunque algunos países muestran señales positivas en la movilización y asignación de recursos hacia sectores ambientales y climáticos, la región continúa caracterizándose por una **profunda dependencia de actividades intensivas en carbono**. Esta situación no solo restringe la capacidad de los países para transitar hacia **economías bajas en carbono y resilientes al clima**, sino que también compromete su estabilidad macroeconómica ante la creciente exposición a los impactos del cambio climático y la pérdida de biodiversidad.

A nivel regional, el IFS 2025 evidencia una **asimetría estructural persistente en los flujos financieros públicos**. Los **ingresos intensivos en carbono superan en 11 veces a los ingresos sostenibles**, mientras que los **presupuestos intensivos en carbono son 5 veces mayores a los presupuestos sostenibles**. En términos absolutos, los 20 países analizados



generaron alrededor de **199.5 mil millones de dólares por actividades extractivas**, frente a sólo **17.9 mil millones de dólares provenientes de ingresos sostenibles**. En el gasto público, los gobiernos destinaron **71.3 mil millones de dólares a sectores intensivos en carbono**, en comparación con **13.1 mil millones de dólares asignados a actividades sostenibles**.

Estas cifras presentan una **incongruencia entre los compromisos climáticos asumidos y la ejecución fiscal real**, lo que resalta la necesidad urgente de reorientar los presupuestos nacionales y locales hacia la acción climática, la protección de ecosistemas y la reducción de vulnerabilidades. Este hallazgo es particularmente relevante en el contexto del **paquete financiero que se discutirá en la COP30**, el cual busca fortalecer la transparencia, la trazabilidad y la rendición de cuentas en el uso de los recursos destinados a la adaptación, mitigación y conservación.

Entre los principales resultados, **Panamá** se posiciona como el país con el **mayor desempeño regional**, alcanzando una puntuación de **3.5 sobre 4.0 puntos**, correspondiente al nivel **“Muy Alto”**. Esto se explica por un **bajo nivel de dependencia de fuentes intensivas en carbono** - menos del 2% de sus ingresos y 0.1% de su gasto - y por su **alto acceso a financiamiento internacional para la biodiversidad y el cambio climático**, que representa más del 40% del total recibido para el desarrollo.


En contraste, **Cuba y Trinidad y Tobago** se mantienen en el nivel de desempeño **“Bajo”**, con una **puntuación de 1.0**, debido a su **alta exposición a ingresos fósiles y a la limitada disponibilidad de información fiscal y ambiental**. Sin embargo, ambos países muestran una ligera mejora frente a la edición anterior, al incrementar su proporción de presupuesto sostenible.

Por su parte, **República Dominicana** destaca como el **principal receptor de ingresos sostenibles**, con **1.4 mil millones de dólares** destinados a la biodiversidad y cambio climático, equivalentes al **49.4% de su financiamiento total para el desarrollo**. Le siguen **Panamá (41.4%) y Cuba (37.3%)**, ambos clasificados en el nivel **“Alto”**. Estos resultados muestran que, pese a las limitaciones estructurales, algunos países de la región están logrando **canalizar recursos con mayor coherencia hacia objetivos de sostenibilidad**.

En el otro extremo, **Ecuador** se consolida como el país **más dependiente de fuentes intensivas en carbono**, con un **35.2% de sus ingresos** provenientes de estas actividades, seguido de **México (28.6%), Trinidad y Tobago (14.6%) y Perú (14.3%)**. Este patrón reafirma la persistencia de un modelo económico **basado en la extracción de combustibles fósiles y actividades contaminantes**, que obstaculizan la transición energética y amplía las brechas de vulnerabilidad climática.


En cuanto al gasto público, la región destina en promedio **menos del 1% del presupuesto a sectores sostenibles**. **El Salvador** sobresale al asignar **casi el 5% de su presupuesto a actividades sostenibles**, alcanzando el nivel **“Alto”**. En contraste, **Bolivia y Costa Rica** son los países con **mayor proporción del gasto público orientado a sectores intensivos en carbono**, destinando **15.91% y 15.32%**, respectivamente, a actividades con alto impacto ambiental.

En conjunto, el análisis del IFS 2025 muestra avances puntuales en diversos países, impulsados en algunos casos por el financiamiento internacional y en otros por



esfuerzos nacionales de reasignación presupuestaria. No obstante, la región en su conjunto enfrenta desafíos estructurales: la dependencia de flujos externos, la persistencia de ingresos ligados a sectores intensivos en carbono y la débil capacidad institucional para orientar las finanzas hacia la sostenibilidad de manera consistente.

Estos elementos evidencian que, aunque se registran progresos, la región aún tiene por delante un largo camino hacia una transformación fiscal y financiera capaz de sostener la transición hacia economías bajas en carbono y resilientes al clima, que permita cumplir con el **Artículo 2.1.c del Acuerdo de París**, respecto a hacer los flujos de financiamiento consistentes con el desarrollo bajo en carbono y resilientes al clima.



1. Índice de Finanzas Sostenibles

El Índice de Finanzas Sostenibles (IFS) es una herramienta desarrollada por el Grupo de Financiamiento Climático para Latinoamérica y el Caribe (GFLAC), aplicada de manera anual. Su propósito es monitorear los ingresos y egresos nacionales e internacionales relacionados con el cambio climático y el desarrollo sostenible, así como identificar los recursos que aún se destinan a actividades que obstaculizan la transición hacia economías bajas en carbono y resilientes al clima, particularmente aquellos vinculados a la extracción y producción de combustibles fósiles y la minería.

El IFS se aplica a los 20 países con mayores emisiones de gases contaminantes en América Latina y el Caribe (ALC) y se calcula a partir de cuatro variables que integran distintos rubros de las finanzas públicas nacionales e internacionales:

- **Ingresos Sostenibles (IS):** Incluyen el financiamiento internacional para el desarrollo, con énfasis en los recursos bilaterales y multilaterales destinados a biodiversidad y cambio climático, expresados como proporción del financiamiento para el desarrollo.
- **Ingresos Intensivos en Carbono (IIC):** Comprenden los ingresos provenientes de la exploración, explotación de hidrocarburos, minerales y combustibles fósiles, medidos en relación con el ingreso total.
- **Presupuestos Sostenibles (PS):** Corresponde al gasto público asignado a biodiversidad, cambio climático, energías renovables, eficiencia energética, gestión forestal, transporte sostenible, conservación de océanos y atención de desastres naturales, como proporción del gasto total.
- **Presupuesto Intensivo en Carbono (PIC):** Engloban los recursos destinados a actividades relacionadas con hidrocarburos y procesos industriales contaminantes, como el financiamiento a empresas estatales de petróleo y gas, expresados como proporción del gasto total.

El IFS es una herramienta de evaluación y monitoreo que permite identificar el nivel de desarrollo de las finanzas sostenibles en los países de ALC. Además de medir el grado de avance, el índice revela las principales brechas, necesidades y oportunidades en materia de financiamiento sostenible. De esta manera, se consolida como un instrumento estratégico para orientar las políticas públicas hacia una recaudación, asignación y uso más eficiente de los recursos, impulsando la acción climática y favoreciendo una transición justa y resiliente.

1.1 Metodología del Índice de Finanzas Sostenibles

La metodología del IFS se compone de dos elementos complementarios: el análisis de los indicadores cualitativos y la estimación de las variables cuantitativas. En conjunto, ambos componentes permiten obtener una visión integral sobre el estado, evolución y potencial de las finanzas sostenibles en los países de la región.

Indicadores cualitativos

El análisis cualitativo del IFS se basa en el marco conceptual propuesto por Guzmán (2020), el cual identifica los factores estructurales e instituciones que influyen en la asignación del presupuesto público y en la integración de la sostenibilidad en la política fiscal y financiera.

Estos indicadores se agrupan en cuatro grandes rubros – ambiental, económico, financiero y social – que permiten comprender el contexto general en el que se desarrollan las finanzas sostenibles:

1. **Ambientales:** Reflejan el estado de los recursos naturales y la calidad ambiental de cada país. Este rubro incluye indicadores como el índice de riesgo climático, la tasa de agotamiento de los recursos naturales, las emisiones de dióxido de carbono (CO₂) y el consumo energético. En conjunto, permiten evaluar la presión ambiental y la vulnerabilidad de los ecosistemas, así como los retos que enfrentan los países para transitar hacia modelos productivos bajos en carbono.
2. **Económicos:** Examinan la estabilidad macroeconómica, la estructura productiva y la capacidad de generar recursos internos que permitan financiar las políticas de sostenibilidad. Incluyen indicadores como el Producto Interno Bruto (PIB), la tasa de crecimiento económico, los niveles de ingreso nacional y la distribución presupuestaria, ofreciendo una visión sobre la solidez y sostenibilidad de la economía frente a los desafíos climáticos y ambientales.
3. **Financieros:** Analizan los flujos financieros destinados a la acción climática y sostenibilidad. Este rubro incorpora información sobre los fondos bilaterales y multilaterales, tales como el Fondo Verde del Clima (GCF, por sus siglas en inglés), el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF, por sus siglas en inglés) y el Fondo de Inversión Climática (CIF, por sus siglas en inglés). Su objetivo es medir la capacidad del sistema financiero para movilizar recursos hacia inversiones sostenibles.
4. **Sociales:** Valoran las condiciones sociales que inciden en la adopción y efectividad de las políticas sostenibles. Consideran indicadores como el nivel educativo, la equidad de género, la tasa de pobreza y la población total, que influyen directamente en la capacidad de los países para impulsar una transición justa e inclusiva.

En conjunto, estos cinco rubros cualitativos presentan un marco contextual amplio que contempla el análisis cuantitativo del índice y permite identificar las condiciones estructurales, institucionales y sociales que facilitan o limitan el avance de las finanzas sostenibles en la región.

Variables cuantitativas

El componente cuantitativo del IFS se basa en la estimación de cuatro variables principales, construidas a partir de información sobre ingresos y egresos públicos de cada país. Estas variables permiten distinguir entre los flujos financieros que favorecen la transición sostenible y aquellos que refuerzan la dependencia de sectores intensivos en carbono. Cada variable se calcula con base en fuentes oficiales y metodologías comparables a nivel regional, lo que garantiza la consistencia, transparencia y trazabilidad de los resultados. En la siguiente tabla se presenta la descripción y fuente de información correspondiente a cada una de las variables que conforman el índice.

Tabla 1. Variables cuantitativas del IFS

Variable	Descripción	Fuente
Ingresos Sostenibles (IS)	Corresponde a los recursos obtenidos mediante financiamiento y cooperación internacional para el desarrollo, específicamente destinados a la biodiversidad y el cambio climático. Incluye fondos provenientes de fuentes bilaterales y multilaterales, canalizados hacia los países durante el año analizado. El porcentaje que representan estos flujos respecto al financiamiento total para el desarrollo define el nivel de ingresos sostenibles.	Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). En particular, se utilizaron las bases de datos Climate-related Development Finance – Recipient Perspective (CRDF) y Creditor Reporting System (CRS), correspondientes al año 2023, que representa la información más actualizada disponible al momento de la recopilación de datos (septiembre de 2025).
Ingresos Intensivos en Carbono (IIC)	Comprenden los recursos fiscales provenientes de la recaudación tributaria y no tributaria vinculada a la producción y extracción de gas, petróleo y minerales, así como de los impuestos aplicables a los combustibles fósiles, registrados durante el año analizado. El porcentaje que representan estos ingresos respecto al ingreso total corresponde a los ingresos intensivos en carbono.	Información publicada por los gobiernos nacionales a través de las instituciones competentes en materia de ingresos, principalmente en la Ley de Ingresos correspondientes al Ejercicio Fiscal 2024.
Presupuestos Sostenibles (PS)	Representan los recursos públicos etiquetados y asignados a programas o acciones relacionadas con la biodiversidad, cambio climático, gestión forestal, eficiencia energética, energías renovables y la atención a desastres naturales. En esta edición del IFS se incorporan además los sectores de conservación de océanos y transporte sostenible, ampliando así la cobertura temática de la variable. El porcentaje que representan estos recursos respecto al presupuesto total determina el nivel de presupuestos sostenibles.	Información publicada por los gobiernos nacionales a través de las instituciones responsables en materia presupuestaria, principalmente en la Ley de Egresos correspondiente al Ejercicio Fiscal 2024.
Presupuestos Intensivos en Carbono (PIC)	Incluyen los recursos públicos asignados a actividades o programas vinculados con la explotación de hidrocarburos, tales como la exploración, extracción, refinación, petroquímica y transporte. Asimismo, se incorpora la información presupuestal destinada a empresas estatales encargadas de la explotación de gas y petróleo en aquellos países que cuentan con este tipo de instituciones. El porcentaje que representan estos recursos respecto al presupuesto total constituye el indicador de presupuestos intensivos en carbono.	Información publicada por los gobiernos nacionales a través de las instituciones competentes en materia presupuestaria, principalmente en la Ley de Egresos correspondiente al Ejercicio Fiscal 2024.

Fuente. Elaboración propia

En conjunto, estas cuatro variables permiten evaluar el equilibrio entre los flujos financieros que impulsan la sostenibilidad y aquellos que perpetúan la dependencia de sectores con altas emisiones de carbono. Su análisis integrado proporciona una visión cuantitativa del grado de alineación de las finanzas públicas con los objetivos climáticos de cada país.

1.2 Estimación del Índice de Finanzas Sostenibles

La metodología del Índice de Finanzas Sostenibles (IFS) se basa en un análisis comparativo de los flujos de ingresos y egresos públicos, diferenciando entre aquellos que impulsan la transición hacia una economía sostenible y los que mantienen la dependencia de actividades intensivas en carbono.

Cada variable se califica en una escala de 0 a 1 punto. En este marco, los ingresos y presupuestos sostenibles se consideran variables positivas, por lo que los países que asignan una mayor proporción de recursos a estos sectores obtienen valores cercanos a 1 punto. En contraste, los ingresos y presupuestos intensivos en carbono se catalogan como variables negativas, de modo que los países con una alta concentración de recursos en estos sectores registran puntuaciones más próximas a 0 puntos.

La calificación final del IFS resulta de la suma de las cuatro variables, con un rango total de 0 a 4 puntos. A partir de este puntaje, los países se clasifican en siete niveles de finanzas sostenibles: **Muy Alto** (3.5 a 4.0 puntos), **Alto** (2.9 a 3.4), **Medio Alto** (2.3 a 2.8), **Medio** (1.8 a 2.2), **Medio Bajo** (1.2 a 1.7), **Bajo** (0.6 a 1.1) y **Muy Bajo** (0.0 a 0.5).

Por ejemplo, un país que presenta altos ingresos y presupuestos sostenibles, junto con bajos niveles de ingresos y presupuestos intensivos en carbono, alcanzaría una puntuación total de 4.0 puntos, ubicándose así en el nivel **Muy Alto** del índice. En la siguiente tabla se presenta un ejemplo hipotético de la estimación del Índice de Finanzas Sostenibles, que ilustra la aplicación de esta metodología.

Tabla 2. Ejemplo hipotético de la estimación del Índice de Finanzas Sostenibles


Valoración de las variables	Ecuación operativa	Resultado del IFS
IS: 0.6 IIC: 0.8 PS: 0.5 PIC: 0.4	$IFS = IS + IIC + PS + PIC$ $IFS = 0.6 + 0.8 + 0.5 + 0.4$ $IFS = 2.2$	El país obtendría una valoración de 2.2 puntos, ubicándose en un nivel “ Medio ” de finanzas sostenibles.

Fuente. Elaboración propia

La importancia metodológica del IFS radica en su capacidad para ofrecer una clasificación comparativa y objetiva que refleja el equilibrio entre los recursos orientados a la sostenibilidad y aquellos dirigidos a sectores con alta intensidad de carbono. Esta doble perspectiva permite identificar tendencias regionales, así como brechas estructurales en la asignación de recursos públicos y en la dependencia fiscal de las economías extractivas.

El carácter dinámico del índice, actualizado anualmente con fuentes oficiales y de acceso público, lo consolida como una herramienta estratégica de monitoreo que facilita el seguimiento continuo de los avances y retrocesos en materia de financiamiento climático. Esta periodicidad garantiza la pertinencia de sus resultados y su utilidad práctica para fortalecer el diseño de políticas públicas, mejorar la planificación fiscal y presupuestaria, e impulsar la movilización de recursos hacia la acción climática.

En coherencia con el Artículo 2.1.c del Acuerdo de París, que establece la necesidad de “*hacer coherentes los flujos financieros con una trayectoria hacia un desarrollo con bajas emisiones*”



de gases de efecto invernadero y resiliente al clima”, el IFS aporta una base empírica para evaluar ese grado de alineación a nivel nacional y regional. Al visibilizar simultáneamente los flujos financieros que favorecen la transición sostenible y aquellos que la limitan, el índice permite identificar las asimetrías que obstaculizan dicha coherencia financiera y orientar las reformas necesarias para avanzar hacia economías bajas en carbono.

En definitiva, el IFS actúa como un puente metodológico entre los compromisos internacionales y las realidades nacionales, proporcionando información crítica sobre el espacio fiscal disponible y las oportunidades de transformación económica, ambiental y social. Con ello, se consolida como un instrumento clave para acelerar la implementación del Acuerdo de París, a través de una gestión fiscal, presupuestaria y financiera coherente con la acción climática.

2. Implementación del Índice de Finanzas Sostenibles

La implementación del Índice de Finanzas Sostenibles (IFS) se realizó para los 20 países de estudio de América Latina y el Caribe, tomando como referencia la información correspondiente al año 2024. La recopilación de datos se efectuó a partir de fuentes oficiales y verificables, lo que garantiza coherencia metodológica, comparabilidad y trazabilidad en cada una de las etapas del análisis.


Esta sección presenta los resultados de la implementación del IFS en dos apartados complementarios. En primer lugar, se desarrolla el análisis de los indicadores cualitativos, organizados en cuatro rubros —ambientales, económicos, financieros y sociales— que permiten contextualizar las condiciones estructurales e institucionales que influyen en el desempeño de cada país y en su capacidad para avanzar hacia finanzas públicas más sostenibles.

En segundo lugar, se exponen los resultados cuantitativos derivados de la estimación del IFS, contruidos a partir de las cuatro variables que lo integran: Ingresos Sostenibles, Ingresos Intensivos en Carbono, Presupuestos Sostenibles y Presupuestos Intensivos en Carbono. El análisis conjunto de estas dimensiones permite no solo realizar comparaciones entre países, sino también identificar patrones regionales, brechas persistentes y avances diferenciados en la alineación de las finanzas públicas con los compromisos nacionales e internacionales en materia de sostenibilidad, biodiversidad y cambio climático.

2.1 Análisis de las variables cualitativas

América Latina y el Caribe (ALC) enfrenta una combinación compleja de alta vulnerabilidad climática y profundas desigualdades ambientales, económicas, políticas y sociales. Estas asimetrías condicionan la capacidad de los países para avanzar hacia un desarrollo sostenible, generando trayectorias muy distintas: mientras algunos han fortalecido marcos regulatorios para impulsar energías renovables, eficiencia energética y gestión sostenible del territorio, otros continúan dependiendo de industrias extractivas y de matrices energéticas intensivas en combustibles fósiles. Esta heterogeneidad se refleja en la velocidad, la escala y la calidad de la transición sostenible en la región.

El análisis de las variables cualitativas permite identificar estas diferencias estructurales y comprender los factores institucionales, regulatorios y de gobernanza que influyen en la



adopción de prácticas financieras sostenibles. Complementados con los resultados del Índice de Finanzas Sostenibles (IFS), estos indicadores ofrecen una visión integral del desempeño regional, mostrando tanto los avances logrados como los desafíos que persisten. En conjunto, evidencian la necesidad de fortalecer los sistemas financieros, mejorar la coordinación interinstitucional y acelerar la integración de criterios ambientales, sociales y de gobernanza para enfrentar los desafíos globales y orientar a ALC hacia una transición justa y resiliente.

Indicadores ambientales

En términos ambientales, la región de ALC es rica en recursos naturales, pero también se encuentra en un momento crítico marcado por la convergencia de desafíos estructurales y oportunidades estratégicas para impulsar un desarrollo más sostenible. La región, reconocida mundialmente por su enorme diversidad biológica y abundancia de recursos naturales, enfrenta al mismo tiempo crecientes presiones derivadas del cambio climático, la expansión de actividades extractivas, el uso intensivo de combustibles fósiles y la desigualdad en el acceso a energía limpia. Esta combinación de fortalezas y vulnerabilidades convierte a ALC en un territorio clave para comprender cómo las dinámicas ambientales, económicas y sociales interactúan, y cómo los países avanzan hacia la descarbonización, la transición energética y la sostenibilidad territorial. Para ello, resulta fundamental analizar un conjunto actualizado de indicadores ambientales que permiten monitorear tendencias en emisiones, uso de energía, consumo de recursos y presión ecológica, y que ofrecen una mirada más precisa sobre el estado ambiental de la región y los desafíos que aún persisten.

El indicador de agotamiento de los recursos naturales, elaborado por el Banco Mundial, estima el impacto económico que generan las actividades extractivas, como la minería, la explotación de hidrocarburos y el aprovechamiento forestal, sobre el capital natural de cada país. Su relevancia para las finanzas sostenibles radica en que permite cuantificar la pérdida de activos ambientales que sostienen la productividad económica a largo plazo. Un mayor nivel de agotamiento refleja una estructura productiva vulnerable, dependiente de sectores no renovables y expuesta a riesgos financieros asociados a impactos ambientales, volatilidad de mercados y transición hacia economías bajas en carbono. Por ello, este indicador es clave para orientar decisiones de inversión, evaluar riesgos ambientales y diseñar políticas que promuevan modelos económicos más resilientes.

La gráfica presenta la tasa de agotamiento de los recursos naturales en 2021 para países de América Latina y el Caribe, evidenciando una marcada dispersión en los niveles de extracción de recursos no renovables. Los valores más elevados se concentran en Chile (9.41), Perú (7.64) y Trinidad y Tobago (6.94), seguidos por Ecuador (6.36), Colombia (5.74) y Brasil (4.21), lo que refleja estructuras productivas con alta dependencia de actividades extractivas. En un rango intermedio se sitúan Bolivia (3.74), México (2.75), Argentina (2.23) y República Dominicana (2.06), cuyos indicadores muestran una presión relevante sobre los recursos, aunque inferior a la de los países con mayor intensidad extractiva.

En el extremo inferior del gráfico se observan tasas sustancialmente menores, con Paraguay (1.44), Panamá (1.37) y Guatemala (1.33), seguidos por El Salvador (0.60) y Honduras (0.56). Los valores más reducidos corresponden a Jamaica (0.32), Uruguay (0.31) y Costa Rica (0.019), mientras que Cuba (0.00) no registra agotamiento según el indicador reportado. La distribución general evidencia diferencias estructurales significativas entre los países,

asociadas al peso relativo de sectores extractivos en sus economías y al grado de explotación de recursos naturales agotables. (Banco Mundial, 2021)

Gráfica 1. Tasa de agotamiento de los recursos naturales en 2021



(*) Sin datos

Fuente. Elaboración propia con datos del Banco Mundial (2021), consultados en 2025.

Las brechas en el consumo energético, según los datos más recientes disponibles para 2022, refuerzan las diferencias estructurales entre los países de la región. En el uso de gas natural, Argentina (961.516 TJ)¹ encabeza la región con una infraestructura gasífera consolidada, seguida por Brasil (632.376 TJ) y Trinidad y Tobago (443.412 TJ). En cambio, países con limitadas redes de transporte o menor integración energética (como Paraguay, Panamá o Nicaragua) muestran consumos marginales o nulos.

El consumo de electricidad reproduce estas desigualdades. Brasil, con 586.1 TWh², supera ampliamente al resto de la región, seguido de México (354.4 TWh), y luego por Argentina y Chile, a mayor distancia.. En el otro extremo, naciones caribeñas como Jamaica, Nicaragua o El Salvador presentan niveles inferiores a 10 TWh (IEA, Electricity Information 2022), evidenciando no sólo mercados más pequeños, sino también desafíos estructurales en acceso, cobertura y diversificación energética.

Las emisiones de dióxido de carbono y gases de efecto invernadero (GEI) muestran una heterogeneidad marcada entre países. En términos absolutos, Brasil (413.9 millones de toneladas de CO₂) y México (379.7 millones) concentran la mayor parte de las emisiones regionales, seguidos por Argentina y Chile (Emissions Dataset, 2022). Estos volúmenes se explican por el peso de sectores como la generación eléctrica, la industria, la agricultura a gran escala y los cambios en el uso del suelo.

¹ TJ (terajulio): unidad del Sistema Internacional equivalente a 10¹² julios. Utilizada comúnmente en estadísticas de consumo energético.

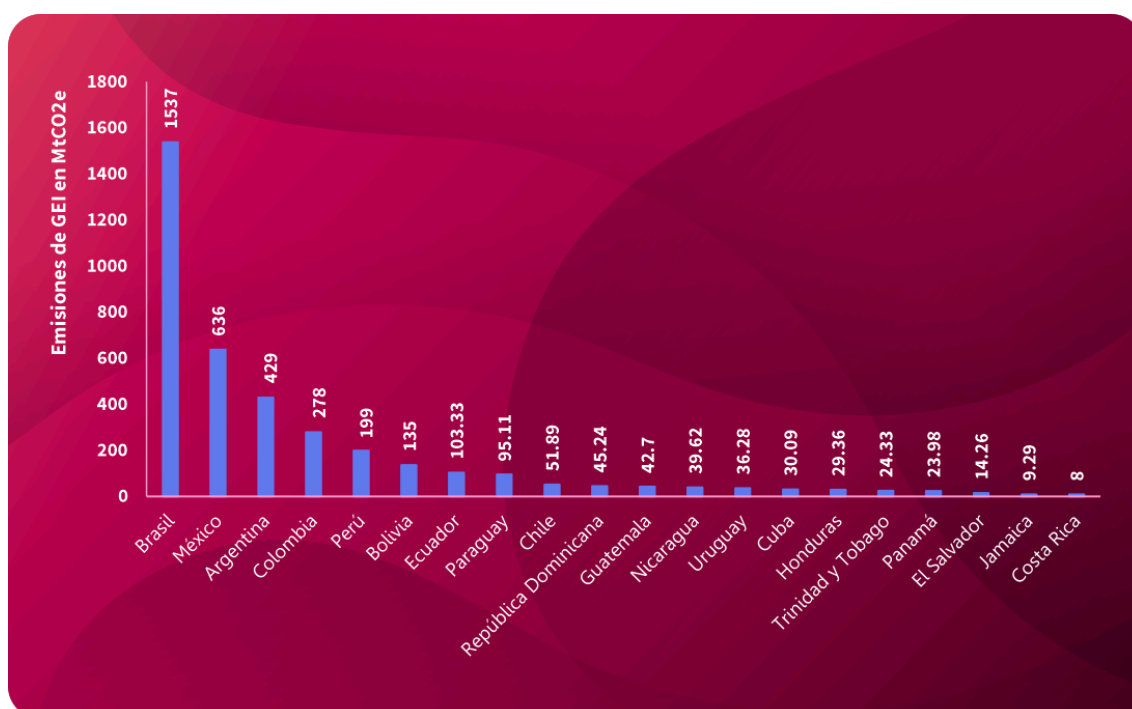
² TWh, o teravatio-hora: unidad de medida de energía empleada para cuantificar el consumo, la producción o la transferencia de electricidad a gran escala.

Sin embargo, una lectura per cápita revela una realidad distinta: Trinidad y Tobago lidera la región con 8.96 t de CO₂ por habitante, un valor que refleja el peso de su industria petroquímica. En contraste, países como Nicaragua, Honduras o Guatemala registran menos de 1.5 t per cápita, mostrando perfiles más asociados al consumo doméstico y productivo de menor escala.

Esta tendencia se replica en las emisiones totales de GEI: (Climate Watch, 2025) Brasil ocupa nuevamente la primera posición con 1,537 MtCO₂e³, seguido por México (636 MtCO₂e) y Argentina (429 MtCO₂e). Aunque estas cifras representan un porcentaje reducido del total mundial, reflejan estructuras productivas todavía ancladas en actividades intensivas en carbono.

La siguiente gráfica presenta el nivel de emisiones de gases de efecto invernadero reportado por cada país de la región.

Gráfica 2. Emisiones de GEI en MtCO₂e en 2022



Fuente. Elaboración propia con datos del ClimateWatch (2022), consultados en 2025.

Indicadores económicos

El panorama económico de América Latina y el Caribe (ALC) en 2024–2025 refleja una región en transición, donde la recuperación post pandemia avanza, pero lo hace de manera profundamente desigual. La heterogeneidad que caracteriza históricamente a ALC en

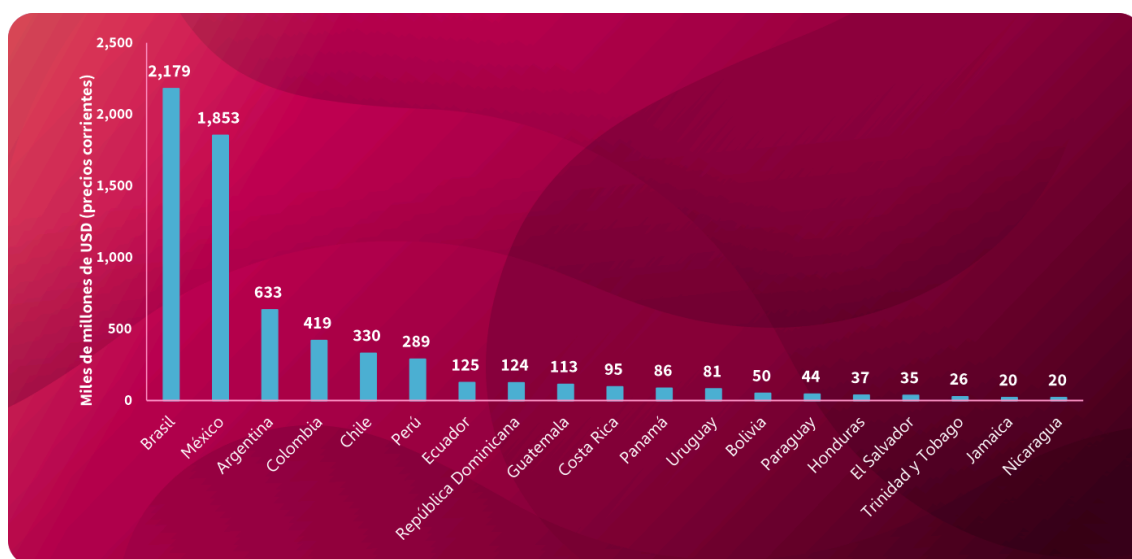
³ **MtCO₂e:** millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente. Unidad estandarizada que cuantifica emisiones agregadas de GEI mediante su conversión a CO₂ según el *Global Warming Potential (GWP)* definido por el IPCC para cada gas, permitiendo la comparabilidad de inventarios nacionales y sectoriales

tamaño económico, estructura productiva, capacidad fiscal y nivel de ingresos. Se manifiesta hoy con mayor claridad, configurando un escenario en el que conviven países con alto dinamismo económico y otros que todavía enfrentan fuertes restricciones para sostener su crecimiento y financiar políticas públicas esenciales.

En términos de actividad económica, los datos de 2024 confirman la marcada concentración del Producto Interno Bruto (PIB) en unas pocas economías de gran escala. Brasil y México continúan siendo los motores económicos de la región, con PIB superiores a los 2.18 y 1.85 mil millones de dólares respectivamente, mientras que Argentina se ubica en un tercer lugar con más de 633 mil millones.

A medida que se avanza hacia países de menor tamaño económico, la magnitud del PIB disminuye de forma pronunciada. Economías del Caribe y Centroamérica, como Jamaica y Nicaragua, registran valores cercanos a 19 mil millones de dólares, lo que evidencia la amplia brecha entre las economías más robustas y aquellas más pequeñas y vulnerables frente a choques externos y variaciones del mercado internacional. La siguiente gráfica ilustra estas diferencias en el tamaño económico de los países de la región.

Gráfica 3. Producto Interno Bruto en miles de millones de dólares en 2024



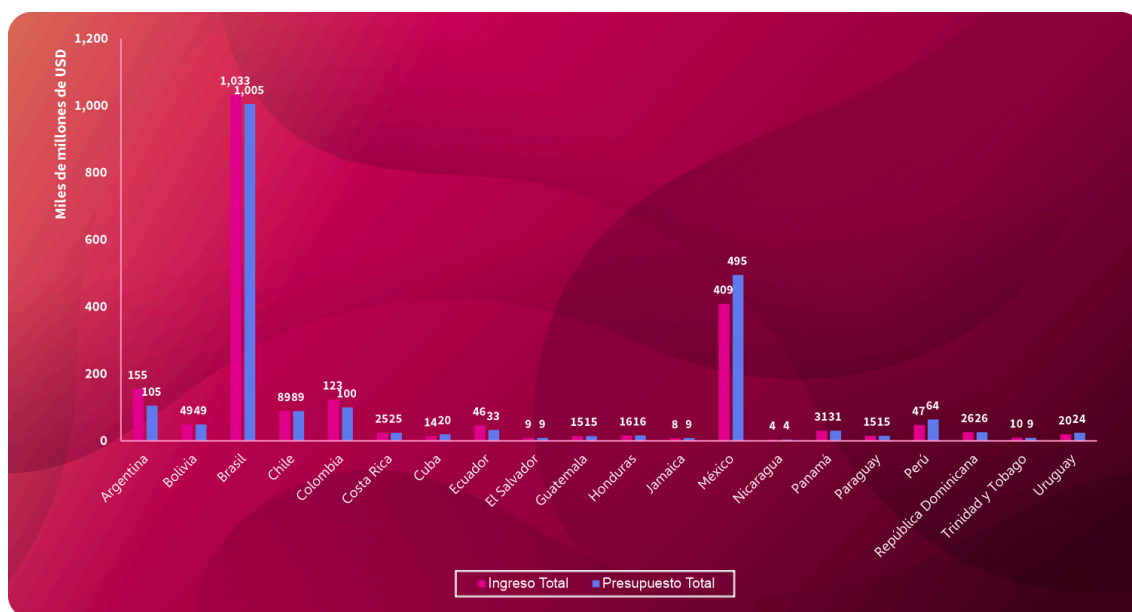
Fuente. Elaboración propia con datos del Banco Mundial (2024), consultados en 2025

Esta desigualdad también se manifiesta en el PIB per cápita, un indicador esencial para comprender el nivel de bienestar económico. Uruguay encabeza la región con un ingreso de 23,907 dólares por habitante, seguido de Panamá y Costa Rica, países que han logrado mantener niveles relativamente altos de desarrollo económico. Al otro extremo, Nicaragua, Honduras y Bolivia registran los valores más bajos, mostrando estructuras productivas menos diversificadas, mayor dependencia de sectores primarios y menor capacidad para absorber crisis externas. Estas diferencias estructurales están a la base de las brechas de desarrollo que persisten en la región y condicionan la velocidad a la que cada país puede avanzar en procesos de transformación productiva o transición energética. (Banco Mundial, 2024)

El análisis de los ingresos públicos en la región evidencia patrones claros de concentración fiscal. En 2024, Brasil se ubicó como el mayor recaudador de América Latina y el Caribe, con ingresos que superaron el billón de dólares, seguido por Argentina, Colombia y Chile. Sin embargo, al ajustar estas cifras por población emergen dinámicas distintas: economías más pequeñas como Trinidad y Tobago y Panamá registran ingresos per cápita significativamente superiores, lo que les otorga mayor flexibilidad para financiar inversiones estratégicas, incluso frente a shocks externos. En contraste, países como Nicaragua y Guatemala muestran ingresos per cápita muy bajos, reflejando capacidades fiscales limitadas y menores márgenes para impulsar políticas sociales, ambientales o climáticas.

El panorama presupuestario refuerza esta asimetría regional. Brasil concentró en 2024 un presupuesto superior a un billón de dólares (casi la mitad de los recursos fiscales de ALC), mientras que México ocupó la segunda posición, seguido por Argentina y Colombia. En el otro extremo, naciones como Nicaragua y Jamaica administran presupuestos sustancialmente más reducidos, que apenas alcanzan entre 4 y 8 mil millones de dólares. Estas diferencias se traducen directamente en disparidades en la provisión de bienes públicos, el mantenimiento de infraestructura y la capacidad para financiar agendas de sostenibilidad y acción climática. La siguiente gráfica compara los ingresos y egresos de los países analizados en la región.

Gráfica 4. Comparación entre ingresos y egresos en miles de millones de dólares en 2024



Fuente. Elaboración propia con datos de diversos documentos fiscales de los 20 países de estudio en 2025.

En conjunto, estos indicadores muestran una región donde las desigualdades económicas se manifiestan de múltiples maneras: en la magnitud de las economías, en la capacidad fiscal de los Estados, en los ingresos públicos disponibles y en los recursos que cada país puede destinar al bienestar social, la infraestructura y las transiciones ecológicas. A estas diferencias estructurales se suma un entorno macroeconómico cambiante, en el que la inflación se ha moderado en algunos países, mientras otros continúan enfrentando

aumentos de precios que reducen el poder adquisitivo y ralentizan la recuperación del empleo.

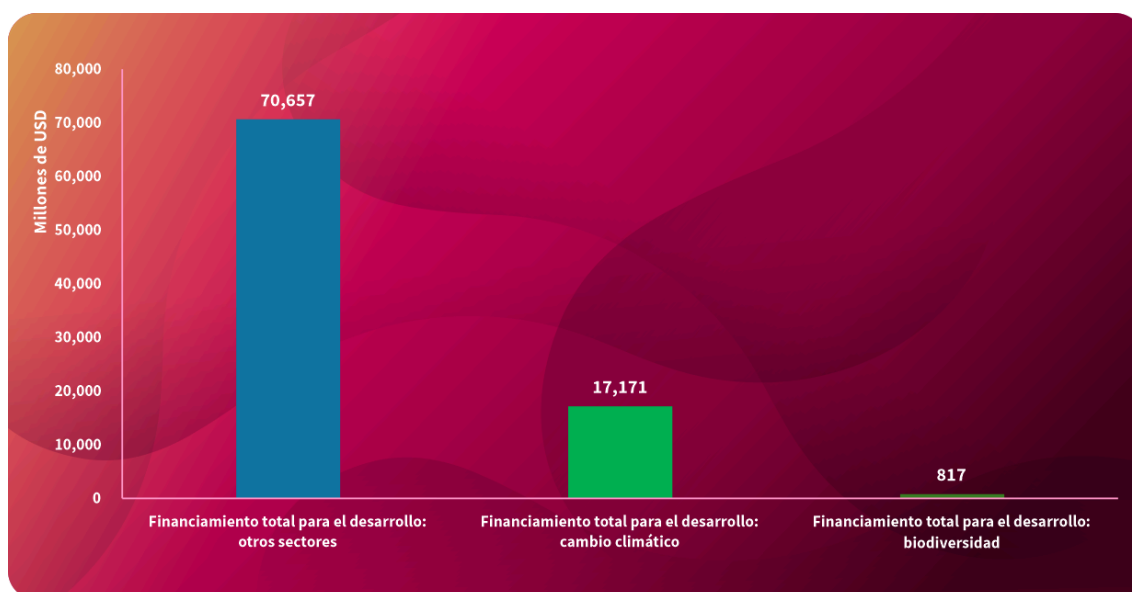
Frente a este panorama, avanzar hacia un modelo de desarrollo más equitativo y sostenible exige la adopción de políticas económicas capaces de reducir las brechas persistentes entre países y dentro de ellos. Esto implica impulsar un crecimiento inclusivo que genere empleo de calidad, ampliar el acceso universal a servicios básicos y fortalecer las capacidades institucionales de los Estados.

Indicadores financieros

El análisis de los flujos de financiamiento internacional en América Latina y el Caribe (ALC) es clave para entender cómo la región enfrenta los desafíos de la crisis climática, la pérdida de la biodiversidad y la transición hacia modelos de desarrollo sostenibles. Estos recursos no solo determinan la capacidad de los países para implementar políticas ambientales y climáticas, sino que también revelan las condiciones bajo las cuales se accede al financiamiento, ya sea en forma de préstamos o subvenciones, lo que influye directamente en la sostenibilidad fiscal y la autonomía económica de los países.

De acuerdo con datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD, 2023), ALC recibió un total de 70.6 mil millones de dólares en financiamiento para el desarrollo, de los cuales 17.9 mil millones de dólares (25.45%) se destinaron específicamente a iniciativas relacionadas con el cambio climático y la biodiversidad. De este monto, 17.1 mil millones se canalizaron a acciones climáticas y 817 millones hacia la protección de la biodiversidad.

Gráfica 5. Financiamiento internacional destinado a la biodiversidad y el cambio climático con respecto al total del financiamiento para el desarrollo en 2023



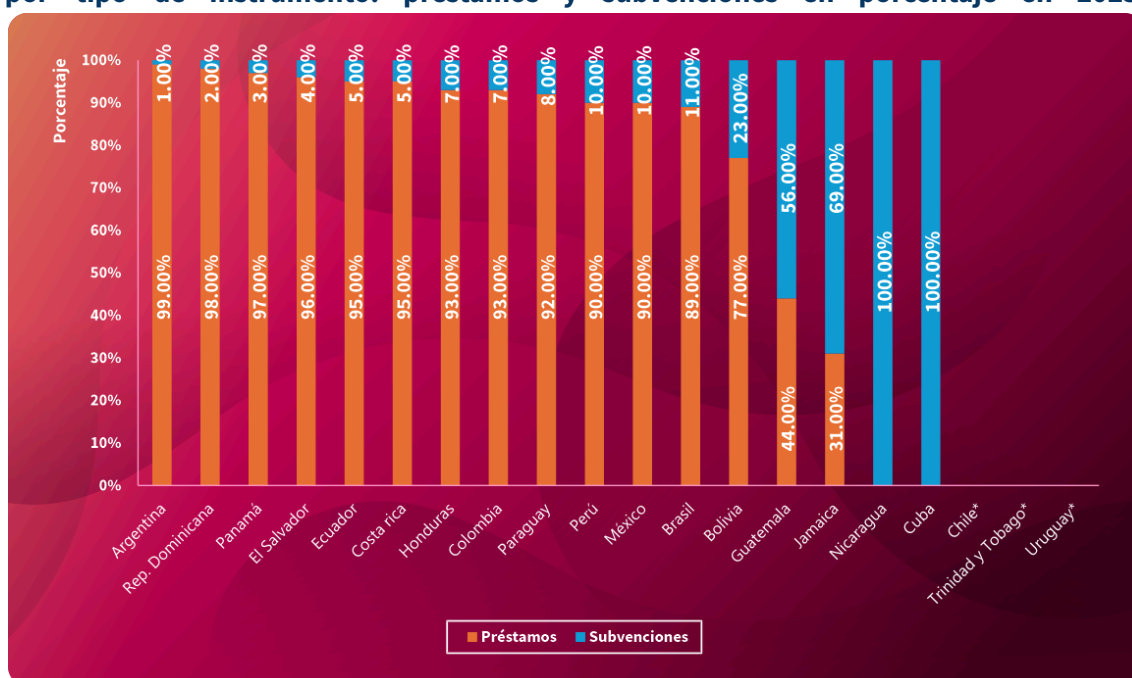
Fuente. Elaboración propia con base en datos de la OCDE, consultados en 2025 y correspondientes al año 2023.

Estos resultados reflejan que, aunque el financiamiento internacional se ha convertido en un instrumento esencial para impulsar la sostenibilidad fiscal y ambiental, su distribución sigue siendo desigual y predominantemente orientada a la mitigación. En efecto, del total de los recursos climáticos, el 65.82% (11.8 mil millones de dólares) se dirigió a acciones de mitigación, mientras que solo el 29.64% (5.3 millones de dólares) se destinó a adaptación. Esta tendencia muestra una brecha estructural: la región continúa priorizando la reducción de emisiones sobre el fortalecimiento de su resiliencia frente a los impactos del cambio climático, a pesar de ser una de las zonas más vulnerables del mundo.


Un elemento constantemente identificado a lo largo de las ediciones del IFS es la alta dependencia de préstamos como principal fuente de financiamiento internacional. Entre 2021 y 2023, la proporción de préstamos apenas varió, pasando de 92.6% a 92.1%, lo que evidencia una persistente limitación en el acceso a recursos no reembolsables. Esta situación genera presiones fiscales adicionales sobre países con márgenes fiscales ya restringidos, dificultando la inversión sostenida en adaptación, restauración ecosistémica o transición energética.

No obstante, algunos países destacan por haber logrado acceder a mayores proporciones de subvenciones: Cuba (100%), Nicaragua (100%), Jamaica (69%) y Guatemala (56%). Este tipo de financiamiento representa un apoyo más sostenible, al no incrementar el endeudamiento público y al permitir una mayor flexibilidad en la implementación de políticas climáticas y ambientales. En contraste, países como Argentina (99%) y República Dominicana (98%) dependen casi totalmente de préstamos, lo que incrementa sus riesgos de sobreendeudamiento y reduce su capacidad para orientar sus presupuestos hacia objetivos de sostenibilidad.

Gráfica 6. Distribución del financiamiento destinado a biodiversidad y cambio climático por tipo de instrumento: préstamos y subvenciones en porcentaje en 2023



Fuente. Elaboración propia con base en datos de la OCDE, consultadas en 2025 y correspondientes al año 2023.



Como parte del financiamiento climático internacional, la región percibe flujos financieros a través de fondos climáticos especialmente enfocados a apoyar iniciativas de mitigación y adaptación. Son 3 los principales fondos climáticos. El Fondo Verde del Clima (GCF, por sus siglas en inglés), que para datos a agosto de 2025 revela que el financiamiento acumulado fue de 3.509 mil millones de dólares y donde el 40% de los proyectos están enfocados a mitigación, 22% a adaptación y 37% a proyectos transversales. Los países con más inversión acumulada son Brasil con 493 millones de dólares, seguido de Costa Rica con 424 millones de dólares y Colombia con 345 millones de dólares (GCF, 2025).

Otro de los principales fondos es el Fondo de Inversión Climática (CIF, por sus siglas en inglés) que, hasta agosto de 2025, se aprobaron 1.027 mil millones de dólares. La información revela que los países que obtuvieron mayor financiamiento de este fondo fueron México con 440 millones de dólares, Brasil con 94 millones de dólares y Honduras con 93 millones de dólares (CIF, 2025). Finalmente, el Fondo Mundial para el Medio Ambiente (GEF, por sus siglas en inglés) que, para datos en el mismo periodo, se aprobaron un total de 6.123 mil millones de dólares. De manera similar con los otros fondos, los países que recibieron mayor financiamiento fueron Brasil con 434 millones de dólares, México con 282 millones de dólares y Colombia con 206 millones de dólares (GEF, 2025).

En conjunto, estos resultados reafirman que la calidad del financiamiento es tan importante como su cantidad. Para los países de América Latina y el Caribe, fortalecer el acceso a recursos concesionales, mejorar la transparencia en su uso y asegurar una distribución equilibrada entre mitigación y adaptación son pasos fundamentales para garantizar una transición justa, fiscalmente sostenible y alineada con el artículo 9.1 del Acuerdo de París que establece la provisión de recursos hacia países en desarrollo.

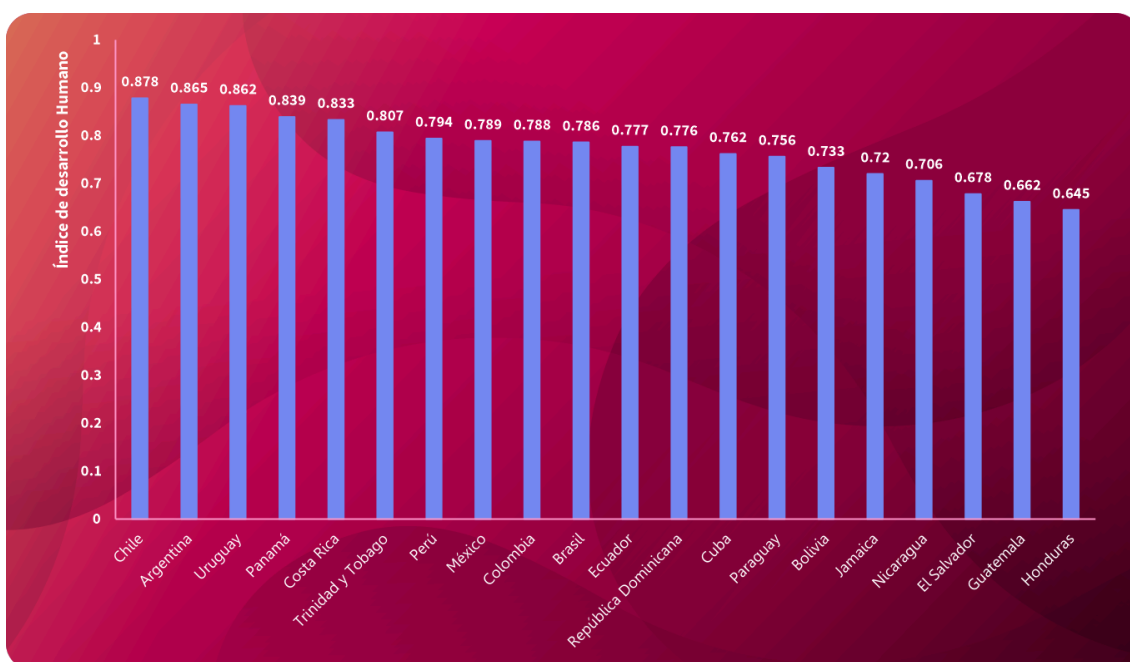
Indicadores sociales

Los indicadores sociales desempeñan un papel clave en la evaluación del bienestar de las personas, ya que ofrecen datos sobre desarrollo humano, pobreza, desigualdad y otros ámbitos relevantes. Constituyen herramientas indispensables para analizar los efectos de las políticas y programas sociales, además de permitir reconocer los principales retos y oportunidades presentes en la región.

Los datos del Índice de Desarrollo Humano (IDH) 2023 evidencian marcadas diferencias en el bienestar social dentro de la región. Chile (0.878), Argentina (0.865), Uruguay (0.862) y Panamá (0.839) encabezan el desempeño regional, reflejando avances consistentes en salud, educación e ingresos. En un nivel medio-alto se ubican Costa Rica, Perú, México y Colombia, mientras que los valores más bajos corresponden a países con mayores limitaciones estructurales, como Nicaragua (0.662), Guatemala (0.645) y Honduras (0.645).

A nivel regional, el crecimiento del IDH entre 2020 y 2023 fue de apenas 0.2%, lo que revela una recuperación lenta tras la pandemia y un estancamiento del progreso humano (PNUD, 2025). Este contexto refuerza los desafíos para fortalecer la cohesión social y reducir brechas persistentes entre países. La siguiente gráfica muestra el IDH correspondiente a los países analizados.

Gráfica 7. Índice de Desarrollo Humano en los 20 países de estudio en 2023



Fuente. Elaboración propia con datos del PNUD (2023), consultados en 2025.

La situación del mercado laboral también refleja los contrastes internos de la región. En 2024, la tasa promedio de desempleo en ALC se situó en torno al 6.2%, pero las diferencias entre países fueron notables. Para datos actualizados a 2024, Colombia (9.6%), Chile (9.1%) y Uruguay (8.4%) registraron las tasas más altas, mostrando mercados laborales aún tensionados. Países como Argentina (7.8%), Costa Rica (7.8%) y Brasil (7.6%) se ubicaron en niveles intermedios, mientras que otras economías, especialmente en Centroamérica y el Caribe presentaron tasas inferiores al promedio regional. Cuba (1.5%), Guatemala (2.2%) y México (2.7%) se destacan con los valores más bajos.

Esta heterogeneidad evidencia que, si bien algunos países han logrado reducir el desempleo, otros continúan enfrentando dificultades para generar empleo formal y de calidad. La persistencia de la informalidad, la limitada diversificación económica y los efectos rezagados de la pandemia siguen influyendo de manera directa en la dinámica laboral.

Gráfica 8. Tasa de desempleo en los 20 países de estudio en 2024



Fuente. Elaboración propia con datos del Banco Mundial (2024), consultados en 2025.

En términos de pobreza multidimensional, bajo la muestra de países que logra cubrir este índice, los datos para el 2024 revelan que todavía América Latina y el Caribe presenta aproximadamente a 34 millones de personas en esta situación, donde además el 1.5% enfrenta pobreza multidimensional, y el 6.4% está en un umbral de vulnerabilidad donde podrían encontrarse en esta situación (OPHI y PNUD, 2024).

Con relación a las brechas de género, en 2025 la región registró una paridad de género total de 74.5%, donde se destaca educación con 99.6% y salud 97.7%. En contraste, la Participación y Oportunidades Económicas (65.6%) y el Empoderamiento Político (35.0 %) mantienen amplias brechas, aunque muestran avances sostenidos (WEF, 2025).

Todo esto en un contexto de crecimiento poblacional donde América Latina y el Caribe alcanzan los 662 millones de personas (Banco Mundial, 2025), pero cuyas tasas de crecimiento se encuentran 3.8% por debajo de lo previsto en el año 2000 (CEPAL, 2024). Lo que revela que la actual población de la región enfrenta un escenario altamente desafiante y con incertidumbre, con menos jóvenes y mayor concentración en áreas urbanas (*Ibid*).

Estas tendencias configuran un escenario de profundas implicaciones sociales: una fuerza laboral en transformación, sistemas de salud que deberán adaptarse a poblaciones más longevas y ciudades que enfrentan una presión creciente sobre infraestructura, vivienda y servicios.

2.2 Análisis de las variables cuantitativas

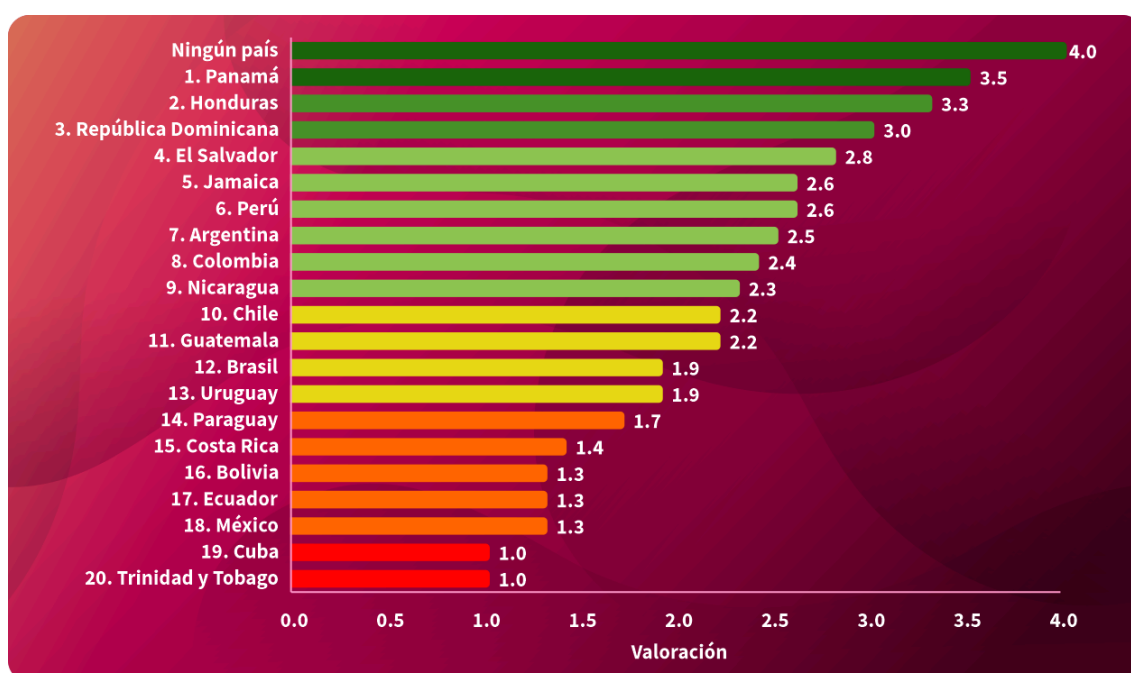
Índice de Finanzas Sostenibles

El Índice de Finanzas Sostenibles (IFS) 2025, elaborado con información actualizada a 2024, muestra una ligera mejora en la valoración de la mayoría de los países analizados. Sin embargo, este avance debe interpretarse con cautela, ya que no refleja transformaciones estructurales profundas en la manera en que los países orientan sus finanzas hacia la sostenibilidad. En esta edición, parte de la mejora general se explica por la incorporación de

nuevos componentes dentro de la variable de Presupuestos Sostenibles, particularmente aquellos vinculados con la conservación de los océanos y el transporte sostenible. Este panorama inicial subraya la distancia que aún existe para cumplir con el Artículo 2.1.c del Acuerdo de París, que establece la necesidad de hacer coherentes los flujos financieros con trayectorias de desarrollo bajas en emisiones y resilientes al clima.

El análisis muestra que ningún país se ubicó en el nivel **“Muy Bajo”**, lo que representa un progreso relativo frente a años anteriores. No obstante, este resultado se debe más a los ajustes metodológicos introducidos que a transformaciones sustantivas en la política fiscal, presupuestaria o financiera de los países de la región.


Gráfica 9. Ranking de Finanzas Sostenibles 2025



Fuente. Elaboración propia con base en documentos fiscales de los 20 países analizados, correspondientes al año 2024.

En esta edición, Panamá se convirtió en el primer país del estudio en alcanzar el nivel **“Muy Alto”** en finanzas sostenibles, con una puntuación de 3.5 sobre un máximo de 4.0 puntos. Este resultado responde a una combinación de factores: fue el segundo mayor receptor de financiamiento internacional para biodiversidad y cambio climático (más del 40% del total), destinó cerca del 2% de su presupuesto a sectores sostenibles y mantuvo una baja dependencia de actividades intensivas en carbono, que representaron menos del 2% de sus ingresos y menos del 0.10% de su gasto. El caso de Panamá evidencia que el acceso a recursos internacionales, combinado con asignaciones presupuestarias sostenibles y una menor exposición a sectores extractivos, puede constituir un camino viable para alinear las finanzas con una trayectoria de bajas emisiones y resiliencia climática, en línea con el Artículo 2.1.c.

En el nivel **“Alto”** se encuentran Honduras (3.3) y República Dominicana (3.0), ambos con mejoras importantes respecto a la edición anterior. Honduras incrementó su valoración de 2.5 a 3.3 puntos, mientras que República Dominicana pasó de 2.4 a 3.0 puntos. Estos



resultados obedecen principalmente al flujo significativo de financiamiento internacional, ya que República Dominicana concentró cerca del 50% del total regional destinado a biodiversidad y cambio climático, y Honduras cerca del 35%. Además, ambos países mantuvieron una baja asignación de gasto en actividades intensivas en carbono.

Aunque los resultados reflejan una mejora sustantiva, la fuerte dependencia de flujos externos plantea interrogantes sobre la sostenibilidad de estos avances a largo plazo, dado que dependen más de la continuidad y estabilidad del financiamiento internacional que de cambios estructurales en las políticas fiscales nacionales.

El nivel **“Medio Alto”** fue el más representativo en esta edición e incluye a El Salvador (2.8), Jamaica y Perú (2.6), Argentina (2.5), Colombia (2.4) y Nicaragua (2.3). Perú aumentó su puntuación de 2.1 a 2.6 puntos debido a la asignación de cerca del 3% de su presupuesto a sectores sostenibles y a la reducción del gasto intensivo en carbono a menos del 1%. El Salvador, por su parte, se ubicó como el país con la mayor proporción de presupuesto orientado a actividades sostenibles, con más del 4% de su gasto total.

Aunque estos resultados reflejan progresos, los países aún enfrentan desafíos estructurales como la falta de diversificación económica, la limitada inversión en sectores sostenibles y la persistencia de economías basadas en actividades extractivas.


En el nivel **“Medio”** se posicionan Chile y Guatemala (2.2), así como Brasil y Uruguay (1.9). En esta edición Chile registró un avance importante al pasar de 1.7 a 2.2 puntos, reflejando una mayor orientación de sus flujos financieros hacia la sostenibilidad. Por el contrario, Guatemala retrocedió de 2.6 a 2.2 puntos, luego de haber ocupado la posición más alta en la edición anterior. Este descenso se explica principalmente por la reducción del financiamiento internacional para la biodiversidad y cambio climático, que disminuyó de 17.4% a 8.1%, y por el aumento de los ingresos derivados de actividades intensivas en carbono, que pasaron de 4% a 6%.

Estos resultados evidencian la fragilidad de los avances cuando no están acompañados de cambios estructurales. Guatemala es un ejemplo de cómo la disminución del financiamiento externo, combinada con un repunte en actividades extractivas, puede revertir progresos en poco tiempo. En contraste, la mejora de Chile sugiere que las políticas fiscales internas pueden amortiguar estas fluctuaciones, aunque todavía muestran limitaciones para alcanzar niveles más altos de sostenibilidad.

En el nivel **“Medio Bajo”** se encuentran Paraguay (1.7), Costa Rica (1.4), Bolivia, Ecuador y México (1.3). Paraguay avanzó de 1.4 a 1.7 puntos gracias a un incremento en los recursos destinados a actividades sostenibles. Bolivia pasó de 1.0 a 1.3 puntos por el aumento del financiamiento climático internacional (del 11% al 27% del total recibido).

No obstante, estos avances no necesariamente muestran transformaciones estructurales en la gestión de las finanzas públicas. En el caso de Bolivia, el progreso se explica en gran medida por la entrada de financiamiento internacional, sin evidencia de una reorientación sustantiva de la política fiscal nacional.

Por otro lado, Ecuador y México mantienen valoraciones bajas debido a su elevada dependencia de ingresos provenientes de actividades intensivas en carbono (más del 25% de sus ingresos totales). A ellos se suma la ausencia de una estrategia integral que incorpore de



manera explícita los criterios de sostenibilidad en la política fiscal y presupuestaria, lo que limita su avance hacia un modelo financiero alineado con los objetivos ambientales y climáticos.

Finalmente, en el nivel “**Bajo**” se encuentran Cuba y Trinidad y Tobago, ambos con una valoración de 1.0 puntos. En el caso de Trinidad y Tobago, la baja puntuación responde a su alta dependencia de los ingresos provenientes de actividades intensivas en carbono, que representan casi el 15% del total. En Cuba, en cambio, la principal limitación fue la ausencia de información disponible para estimar de manera precisa las variables de ingresos y presupuestos intensivos en carbono.

Estos casos ilustran dos de los desafíos más críticos de la región: por un lado, la dificultad de países con economías fuertemente dependientes de sectores extractivos para transitar hacia un modelo sostenible; por otro, las limitaciones institucionales y de transparencia que impiden contar con información confiable y actualizada para evaluar el desempeño.

En conjunto, con la información que provee IFS 2025 se observan avances puntuales, impulsados por el financiamiento internacional o por esfuerzos nacionales de reasignación presupuestaria. Sin embargo, la región aún enfrenta desafíos estructurales significativos: alta dependencia de flujos externos, persistencia de ingresos vinculados a sectores intensivos en carbono y capacidades institucionales insuficientes para orientar las finanzas hacia la sostenibilidad de manera continua. Estas condiciones revelan la amplia brecha que todavía separa a la región del cumplimiento del Artículo 2.1.c del Acuerdo de París, que llama a alinear los flujos financieros con una trayectoria compatible con bajas emisiones de carbono y resiliencia climática.

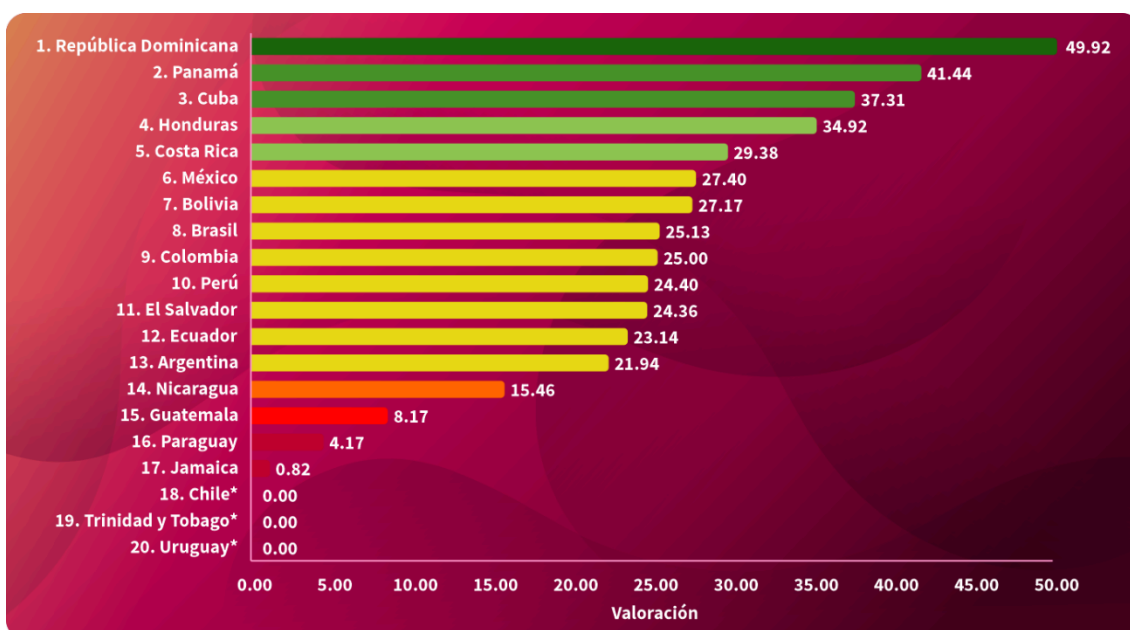
Ingresos Sostenibles

La variable de Ingresos Sostenibles (IS) mide el financiamiento para el desarrollo proveniente de fuentes bilaterales y multilaterales y otros flujos, destinados a la conservación de la biodiversidad y la acción climática. Su cálculo se realiza considerando el porcentaje que representa este financiamiento respecto al total de los recursos recibidos para el desarrollo.

Para esta edición, el cálculo de esta variable se actualizó con información de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), utilizando las bases de datos Credit Reporting System (CRS) y Climate-related Development Finance – Recipient Perspective (CRDF). Se dejó de emplear la información del Aid Atlas – que se basa en diversas bases de datos de la OCDE – debido a un rezago significativo de aproximadamente 3 años en la actualización de la información. A pesar de este cambio, se realizaron pruebas de consistencia para garantizar que la actualización no altere la información y permita la comparabilidad con años anteriores, incorporando así los datos más recientes disponibles, correspondientes a 2023.

Cabe señalar que para Chile, Trinidad y Tobago y Uruguay no se cuentan con registros como receptores de financiamiento en las bases consultadas. Sin embargo, esto no implica que estos países no reciban financiamiento destinado a la biodiversidad y cambio climático, sino que simplemente no están reflejados en estas fuentes de datos.

Gráfica 10. Ranking de Ingresos Sostenibles 2025 (% del total) datos a 2023




Fuente. Elaboración propia con base en datos de la OCDE, consultadas en 2025 y correspondientes al año 2023.

Para esta variable se observa que República Dominicana se posiciona como el principal receptor de financiamiento para biodiversidad y cambio climático, con un total de 1.4 mil millones de dólares, equivalentes al 49.92% de su financiamiento total para el desarrollo. Este desempeño ubica al país en un nivel **“Muy Alto”** de ingresos sostenibles.

En el nivel **“Alto”** de ingresos sostenibles se ubican Panamá y Cuba, que recibieron 1.2 mil millones de dólares (41.44%) y 82 millones de dólares (37.31%), respectivamente. Ambos países presentan una estructura de financiamiento orientado hacia sectores ambientales estratégicos.

En el caso de Panamá, el volumen y la proporción del financiamiento muestran su capacidad en la incorporación de la sostenibilidad como un eje de política pública y de articular proyectos con impacto regional. Cuba, por su parte, muestra una eficiencia destacable en la canalización del financiamiento hacia programas de conservación, pese a las limitaciones estructurales que enfrenta. Estos casos sustentan que el acceso sostenido a financiamiento climático y para la biodiversidad es un factor decisivo para impulsar políticas ambientales consistentes, fortalecer la gobernanza climática y reducir la dependencia de actividades intensivas en carbono.

En el nivel **“Medio Alto”** se encuentran Honduras (34.92%) y Costa Rica (29.38%). El caso de Costa Rica resulta particularmente relevante, ya que pasó de 9.77% en la edición anterior a 29.38% en esta, mostrando un incremento sustancial en su capacidad para captar recursos vinculados a la sostenibilidad. Ambos países destacan por su orientación progresiva hacia el financiamiento climático, lo que ha permitido fortalecer programas de adaptación, reforestación y restauración de ecosistemas.



La mayoría de los países de estudio se concentran en el nivel “**Medio**” de ingresos sostenibles: México (27.40%), Bolivia (27.17%), Brasil (25.13%), Colombia (25.00%), Perú (24.40%), El Salvador (24.36%), Ecuador (23.14%) y Argentina (21.94%). Aunque estos porcentajes indican que una parte considerable de su financiamiento se destina a sectores ambientales, resultan relativamente bajos en proporción a la relevancia ecológica y climática de sus territorios. Este aspecto es particularmente relevante para los países amazónicos – Brasil, Bolivia, Colombia y Ecuador – que albergan aproximadamente el 20% del agua dulce del planeta y el 25% de la flora y fauna mundial⁴. De manera similar, México considerado un país megadiverso, concentra entre el 10% y 12% de las especies conocidas a nivel global⁵.

Esto sugiere la necesidad de fortalecer las capacidades institucionales para captar y gestionar financiamiento internacional, así como de diseñar mecanismos internos de financiamiento verde que permitan aprovechar su potencial de biodiversidad como activo estratégico para el desarrollo sostenible.

En el nivel “**Medio Bajo**” se encuentran Nicaragua (15.46%), mientras que en nivel “**Bajo**” se ubica Guatemala (8.17%), país que muestra una disminución considerable respecto a la edición anterior (17.49%). Finalmente, en el nivel “**Muy Bajo**” se encuentran Paraguay (4.17%) y Jamaica (0.82%), ambos países con caídas respecto a la edición previa. Esta tendencia resalta la persistencia de importantes desafíos vinculados principalmente a la debilidad institucional, la limitada planificación de proyectos y la falta de mecanismos nacionales de seguimiento y reporte de los flujos financieros ambientales.

Además, los resultados de la variable de ingresos sostenibles muestran que, en términos nominales, los países analizados recibieron en conjunto 17.9 mil millones de dólares en financiamiento destinado a la protección de la biodiversidad y al cambio climático.

Brasil fue el país que concentró la mayor cantidad de recursos, con 3.2 mil millones de dólares, equivalente al 25.13% del total recibido. Si bien esta cifra confirma su posición como uno de los principales receptores de financiamiento climático y para la biodiversidad, también pone de manifiesto la desigual distribución de los recursos. Por ejemplo, el monto recibido por Brasil es 234 veces superior al de Jamaica, que únicamente obtuvo 13 millones de dólares. Esta brecha tan amplia muestra que el acceso al financiamiento internacional continúa condicionado por factores como la escala económica, la capacidad institucional, la disponibilidad de proyectos financiables y las prioridades de los organismos y donantes internacionales.

Estas diferencias no solo tienen efectos inmediatos sobre la disponibilidad de recursos para políticas ambientales y climáticas, sino que también influyen en la capacidad de cada país para avanzar en la implementación efectiva de estrategias de mitigación y adaptación, así como en la conservación de la biodiversidad.

En la siguiente tabla se detallan los flujos de financiamiento recibidos por cada país destinados a la biodiversidad y al cambio climático.

⁴ Banco de Desarrollo de América Latina (CAF). “Amazonía”. Disponible en: [Amazonía](#)

⁵ Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO). “Programa Nacional de Restauración: Contexto”. Disponible en: [Contexto | Biodiversidad Mexicana](#)

Tabla 3. Desagregación de los componentes de la variable de ingresos sostenibles por país, monto en dólares (2023).

País	Financiamiento total para el desarrollo	Financiamiento total de la variable de Ingresos Sostenibles (IS)	Financiamiento de la variable de IS: Biodiversidad	Financiamiento de la variable de IS: Cambio Climático
Argentina	9,943,221,533	2,181,811,110	2,102,610	2,179,708,500
Bolivia	2,800,987,572	761,063,397	76,532,011	684,531,386
Brasil	13,003,851,311	3,267,977,946	200,503,729	3,067,474,217
Chile	Sin datos	Sin datos	Sin datos	Sin datos
Colombia	9,076,088,109	2,268,935,130	258,384,400	2,010,550,730
Costa Rica	3,039,095,832	892,866,747	16,799,782	876,066,965
Cuba	221,320,569	82,564,723	10,199,237	72,365,486
Ecuador	5,339,345,464	1,235,317,776	22,208,641	1,213,109,135
El Salvador	1,879,171,527	457,730,521	1,240,548	456,489,973
Guatemala	999,641,544	81,700,602	24,080,559	57,620,043
Honduras	2,543,261,776	888,219,944	35,838,444	852,381,500
Jamaica	1,706,622,163	13,930,477	2,438,799	11,491,678
México	4,973,330,969	1,362,694,082	54,071,810	1,308,622,272
Nicaragua	213,338,019	32,973,818	14,631,669	18,342,149
Panamá	3,085,792,229	1,278,803,103	19,739,022	1,259,064,081
Paraguay	2,306,340,191	96,120,419	3,196,393	92,924,026
Perú	6,540,131,596	1,595,867,599	73,922,464	1,521,945,135
República Dominicana	2,984,962,690	1,489,983,531	1,298,668	1,488,684,863
Trinidad y Tobago	Sin datos	Sin datos	Sin datos	Sin datos
Uruguay	Sin datos	Sin datos	Sin datos	Sin datos

Fuente. Elaboración propia con base en datos de la OCDE, consultadas en 2025 y correspondientes al año 2023.

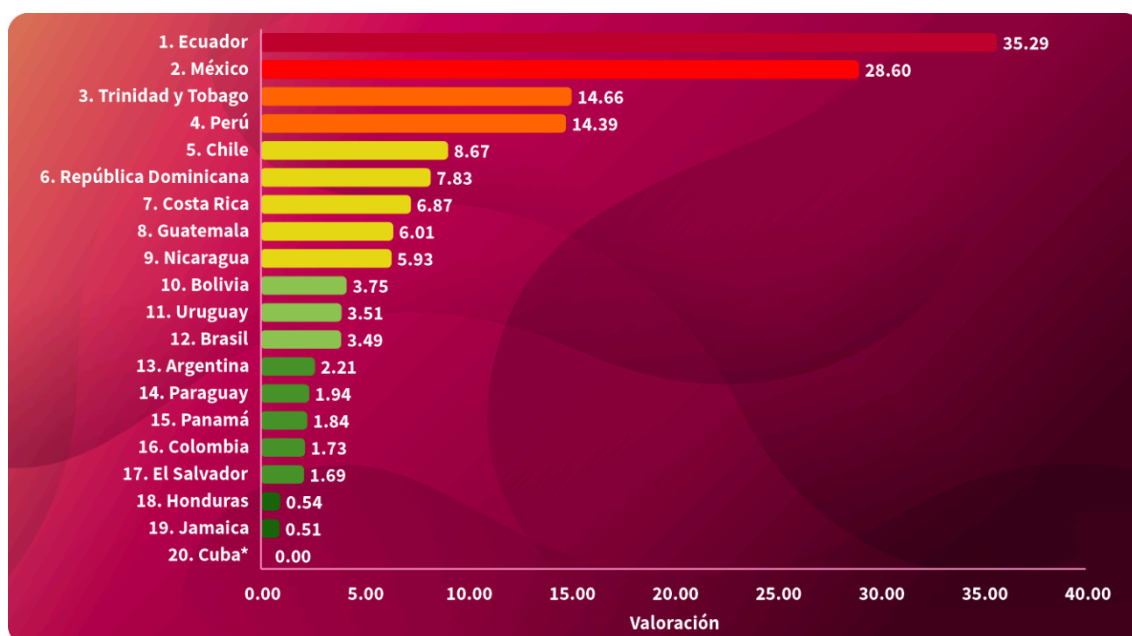
En este contexto, la limitada captación de recursos sostenibles no solo restringe la capacidad de los países para responder de manera efectiva a los impactos del cambio climático, sino que también profundiza su dependencia de actividades económicas intensivas en carbono, perpetuando así estructuras de desarrollo que no son compatibles con una transición justa y sostenible. El fortalecimiento de esta variable adquiere mayor relevancia frente al Nuevo Objetivo Colectivo Cuantificable de financiamiento climático acordado en la COP29 y su Ruta de Bakú a Belém, que establece la meta de movilizar al menos 1.3 billones de dólares hacia la COP30. Este nuevo marco global será clave para incrementar el financiamiento libre de deuda, ampliar el espacio fiscal de los países en desarrollo y acelerar la transformación de sus sistemas financieros, promoviendo una alineación más efectiva con los compromisos climáticos internacionales.

Ingresos Intensivos en Carbono

La variable Ingresos Intensivos en Carbono (IIC) mide la proporción de los recursos públicos que provienen de fuentes fiscales y no fiscales vinculadas a la producción, comercialización o exportación de combustibles fósiles, hidrocarburos y minerales. En términos metodológicos, el indicador se calcula como el porcentaje que estos ingresos representan respecto al total de recursos recaudados por cada país en 2024. La estimación se elaboró con base en información oficial disponible en leyes de ingresos, presupuestos nacionales y reportes fiscales. En el caso de Cuba, la ausencia de datos desagregados imposibilita el cálculo de esta

variable, lo que revela también las limitaciones de transparencia fiscal existentes en algunos contextos de la región.

Gráfica 11. Ranking de Ingresos Intensivos en Carbono 2025 (% del total) datos a 2024




Fuente. Elaboración propia con base en documentos fiscales de los 20 países analizados, correspondientes al año 2024.

Los hallazgos señalan que la dependencia de ingresos fósiles sigue siendo un rasgo estructural de varias economías de la región, condicionando su estabilidad presupuestaria y reduciendo su margen de maniobra para financiar la transición climática. Ecuador, con 35.29% es el país con la mayor proporción de ingresos intensivos en carbono, ubicándose en el nivel **“Muy Alto”**. Aunque la cifra representa una ligera disminución respecto a la edición anterior (37.08%), el país continúa mostrando una marcada vulnerabilidad fiscal y estructural, derivada de su alta dependencia en rentas extractivas. En términos absolutos, Ecuador generó alrededor de 16.2 mil millones de dólares provenientes de estas fuentes, lo que demuestra que los hidrocarburos siguen siendo un pilar central en sus finanzas públicas.

En el nivel **“Alto”** se encuentra México, con un 28.60% de ingresos intensivos en carbono, seguido por Trinidad y Tobago (14.66%) y Perú (14.39%), ambos en el nivel **“Medio Alto”**. En el caso mexicano, la proporción disminuyó respecto al 33.64% registrado en la edición anterior; sin embargo, el país continúa siendo una de las economías más dependientes de los ingresos petroleros de la región, especialmente por la relevancia de Petróleos Mexicanos (PEMEX) en las finanzas públicas. La aparente reducción de la dependencia no refleja una reorientación estructural de las fuentes fiscales, sino más bien factores coyunturales, como la baja en los precios internacionales del crudo y la reducción en la producción nacional.

Por su parte, Trinidad y Tobago redujo su dependencia de los ingresos fósiles de 31.16% a 14.66% en un año, principalmente por la caída de los ingresos del gas y los hidrocarburos, que pasaron de 2.8 a 1.4 mil millones de dólares. Aunque esta disminución reduce nominalmente la exposición del país a los combustibles fósiles, también muestra su vulnerabilidad ante las fluctuaciones internacionales de precios.



En el nivel “**Medio**” se ubican Chile (8.67%), República Dominicana (7.83%), Costa Rica (6.87%), Guatemala (6.01%) y Nicaragua (5.93%). En el caso de Costa Rica y Guatemala, el incremento respecto a la edición anterior – de 4.66% a 6.87% y de 4.01% a 6.01%, respectivamente – resulta particularmente relevante. En ambos países, el aumento de ingresos asociados a combustibles fósiles o actividades extractivas revela una tensión estructural entre las metas climáticas y las necesidades fiscales. Los datos indican que, el riesgo no radica únicamente en el nivel absoluto de dependencia de estos ingresos, sino en la tendencia de crecimiento que presentan en comparación con los ingresos sostenibles.

En el nivel “**Medio Bajo**” incluye a Bolivia (3.75%), Uruguay (3.51%) y Brasil (3.49%), mientras en el nivel “**Bajo**” se encuentran Argentina (2.21%), Paraguay (1.94%), Panamá (1.84%), Colombia (1.73%) y El Salvador (1.69%). En este grupo destaca el caso de Colombia, que redujo su proporción de ingresos intensivos en carbono de 5.79% a 1.73%, una caída significativa que puede interpretarse de manera dual: por un lado, como una oportunidad para acelerar la descarbonización fiscal y reducir la dependencia del petróleo y el carbón; pero por otro, como una advertencia sobre la pérdida de ingresos fiscales estructurales que, si no son reemplazados por fuentes sostenibles, podría comprometer la estabilidad presupuestaria.

Finalmente, en el nivel “**Muy Bajo**” se ubican Honduras (0.54%) y Jamaica (0.51%). Estas economías muestran una baja dependencia de actividades extractivas, lo que constituye una ventaja estructural para la transición hacia modelos de desarrollo sostenible. Esta menor exposición a rentas fósiles les permite diseñar políticas fiscales verdes sin enfrentar la resistencia que suelen acompañar a la reducción de subsidios o gravámenes al carbono. No obstante, el reto para estos países consiste en aprovechar esta ventaja comparativa consolidando fuentes de ingreso estables, diversificadas y coherentes con sus estrategias nacionales de crecimiento ambiental y climático.

El análisis de esta variable evidencia que, en términos agregados, los países de la región obtuvieron 199.5 mil millones de dólares provenientes de actividades con alta huella de carbono durante 2024. Este volumen de recursos confirma la persistente dependencia fiscal de América Latina y el Caribe respecto a sectores extractivos y energéticos convencionales, lo cual limita la capacidad de los gobiernos para transitar hacia estructuras fiscales compatibles con los objetivos climáticos.

En términos monetarios, México fue el país que mayor cantidad de ingresos obtuvo por este tipo de actividades, con 117.1 mil millones de dólares, equivalentes al 28.6% de sus ingresos totales. La mayor parte de estos recursos provino del sector de hidrocarburos, que aportó 93.9 mil millones de dólares, lo que refuerza la centralidad de la renta petrolera en el espacio fiscal nacional, pese a la creciente presión por reducir subsidios y emisiones asociadas al consumo y producción de combustibles fósiles.

En segundo lugar, se ubicó Brasil con 36.1 mil millones de dólares; no obstante, este monto representó únicamente el 3.4% de sus ingresos totales. En el caso brasileño, al igual que en México, la mayor proporción de estos recursos provino del sector hidrocarburos, que generó 33.1 mil millones de dólares.

En la tabla siguiente se presenta el desglose por rubro que conforma la variable de Ingresos Intensivos en Carbono para cada país analizado.

Tabla 4. Ingresos públicos destinados a la variable de ingresos intensivos en carbono en dólares en 2024

País	Ingreso total	Ingreso de la variable IIC	Ingreso de la variable IIC: Combustibles	Ingreso de la variable IIC: Hidrocarburos	Ingreso de la variable IIC: Minería
Argentina	155,277,410,689	3,437,902,693	2,756,016,907	681,885,786	Sin datos
Bolivia	49,250,487,101	1,847,887,673	Sin datos	1,645,595,566	202,292,107
Brasil	1,032,910,010,506	36,028,371,885	1,569,675,612	33,119,015,438	1,339,680,835
Chile	89,127,172,856	7,726,353,375	2,647,500,728	Sin datos	5,078,852,647
Colombia	123,353,774,389	2,137,567,855	129,765,994	1,776,660,328	231,141,533
Costa Rica	24,541,376,691	1,685,767,770	1,683,655,422	Sin datos	2,112,348
Cuba	14,124,975,000	Sin datos	Sin datos	Sin datos	Sin datos
Ecuador	46,177,082,591	16,293,928,517	Sin datos	14,847,268,565	1,446,659,952
El Salvador	9,068,694,112	153,208,874	29,731,795	110,527,330	12,949,749
Guatemala	15,062,998,124	905,682,418	309,130,426	571,199,276	25,352,716
Honduras	16,417,308,469	88,042,871	68,993,932	14,919,787	4,129,152
Jamaica	7,923,429,512	40,036,206	35,133,892	256,668	4,645,646
México	409,340,993,791	117,067,849,495	23,073,573,823	93,994,275,672	Sin datos
Nicaragua	3,785,308,323	224,458,906	195,333,306	397,687	28,727,913
Panamá	30,690,395,220	566,067,874	523,778,874	21,176,000	21,113,000
Paraguay	15,421,298,621	299,430,023	287,702,491	Sin datos	11,727,532
Perú	47,446,958,340	6,825,466,387	856,379,947	1,071,909,719	4,897,176,721
República Dominicana	26,086,450,464	2,041,326,750	423,581,693	1,617,745,057	Sin datos
Trinidad y Tobago	9,972,981,260	1,462,146,766	32,913,988	1,429,232,778	Sin datos
Uruguay	19,803,508,449	694,151,269	691,045,267	Sin datos	3,106,002

Fuente. Elaboración propia con base en documentos fiscales de los 20 países analizados, correspondientes al año 2024.

Los datos de la variable de Ingresos Intensivos en Carbono dejan en claro que la región sigue enfrentando desafíos estructurales relevantes para avanzar hacia economías coherentes con la transición climática. La marcada heterogeneidad entre países —algunos altamente dependientes de las rentas fósiles y otros con estructuras fiscales más diversificadas— evidencia distintos grados de vulnerabilidad y diferentes capacidades para reducir su exposición a sectores intensivos en carbono.

En este sentido, la variable constituye un elemento clave para comprender los desafíos que enfrentan los países de la región en el proceso de transición. La elevada dependencia de actividades intensivas en carbono sigue operando como un freno estructural, retrasando la transformación del sistema fiscal y reduciendo las posibilidades de fortalecer la resiliencia climática, estimular la innovación y canalizar las inversiones hacia sectores que impulsen un desarrollo sostenible e inclusivo. Superar esta dependencia será fundamental para avanzar hacia economías más competitivas, menos vulnerables y alineadas con los objetivos globales de acción climática.

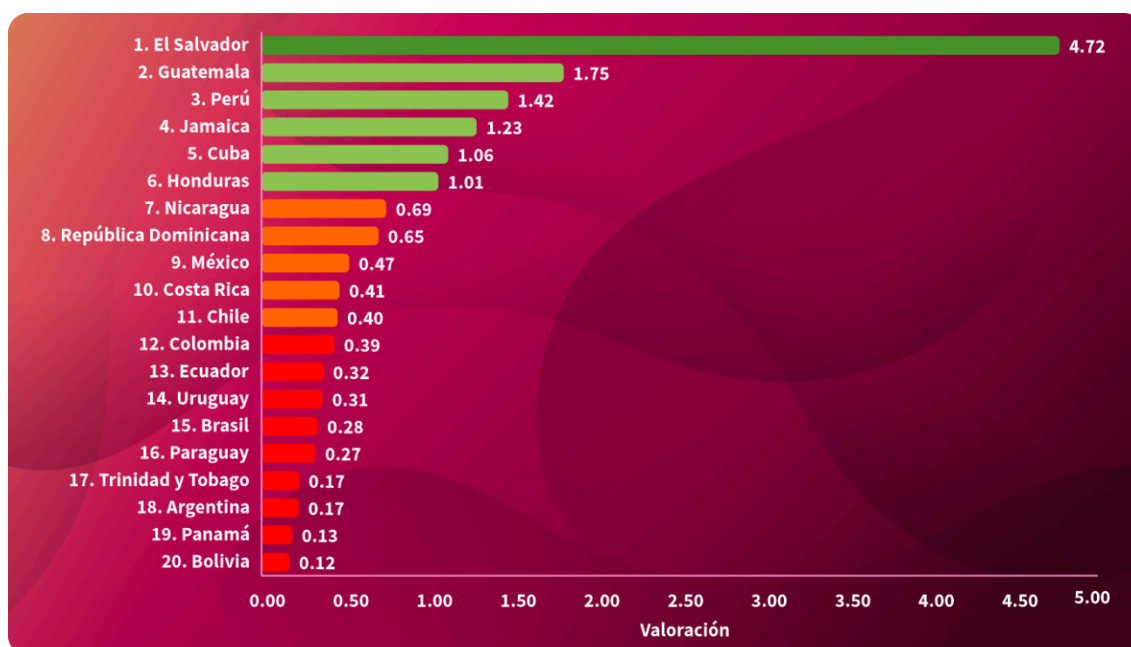
Presupuestos Sostenibles

La variable de Presupuestos Sostenibles (PS) mide el grado en que los países orientan su gasto público hacia sectores vinculados con la sostenibilidad ambiental, incluyendo biodiversidad, cambio climático, manejo forestal, eficiencia energética y atención a desastres naturales. En esta edición, la variable incorpora dos sectores adicionales – conservación de océanos y transporte sostenible – con el fin de capturar de forma más integral la alineación del gasto público con los compromisos ambientales y climáticos nacionales. El cálculo se

realiza con base en la proporción que presentan estos rubros dentro del presupuesto total de 2024, a partir de información oficial de las leyes presupuestales y reportes financieros gubernamentales.

La información analizada muestra una baja integración de la sostenibilidad en la estructura presupuestaria de los países de América Latina y el Caribe. En promedio, la región destina menos del 1% del gasto total a sectores sostenibles, lo que refleja una débil priorización ambiental dentro de la política fiscal. Este patrón persistente sugiere que, pese a los avances discursivos en torno a una transición baja en carbono, el financiamiento público continúa orientado hacia modelos de desarrollo intensivos en recursos naturales y con limitada capacidad para mitigar los riesgos climáticos.

Gráfica 12. Ranking de Presupuestos Sostenibles 2025 (% del total) datos a 2024



Fuente. Elaboración propia con base en documentos fiscales de los países 20 analizados, correspondientes al año 2024.

El caso de El Salvador sobresale al destinar cerca del 5% de su presupuesto a sectores sostenibles, lo que lo ubica en el nivel “**Alto**”. Este incremento con respecto a la edición anterior de (3.16% a 4.72%) denota un esfuerzo institucional por incorporar la sostenibilidad en la planificación presupuestaria. Sin embargo, incluso esta proporción resulta modesta frente a las necesidades de inversión que exige la adaptación climática y la protección de ecosistemas estratégicos.

En el nivel “**Medio Alto**” se ubican Guatemala (1.75%), Perú (1.42%), Jamaica (1.23%), Cuba (1.06%), y Honduras (1.01%). Estos países, junto con El Salvador, son los únicos que superan el 1.0% del gasto total en sectores sostenibles. En particular, el incremento de Honduras de 0.27% a 1.01%, respecto a la edición previa refleja un intento de reorientación presupuestaria; no obstante, la magnitud del cambio sigue siendo insuficiente y evidencia la dependencia estructural de los presupuestos nacionales respecto a los rubros tradicionales, como el gasto corriente y los sectores extractivos. La capacidad institucional limitada para



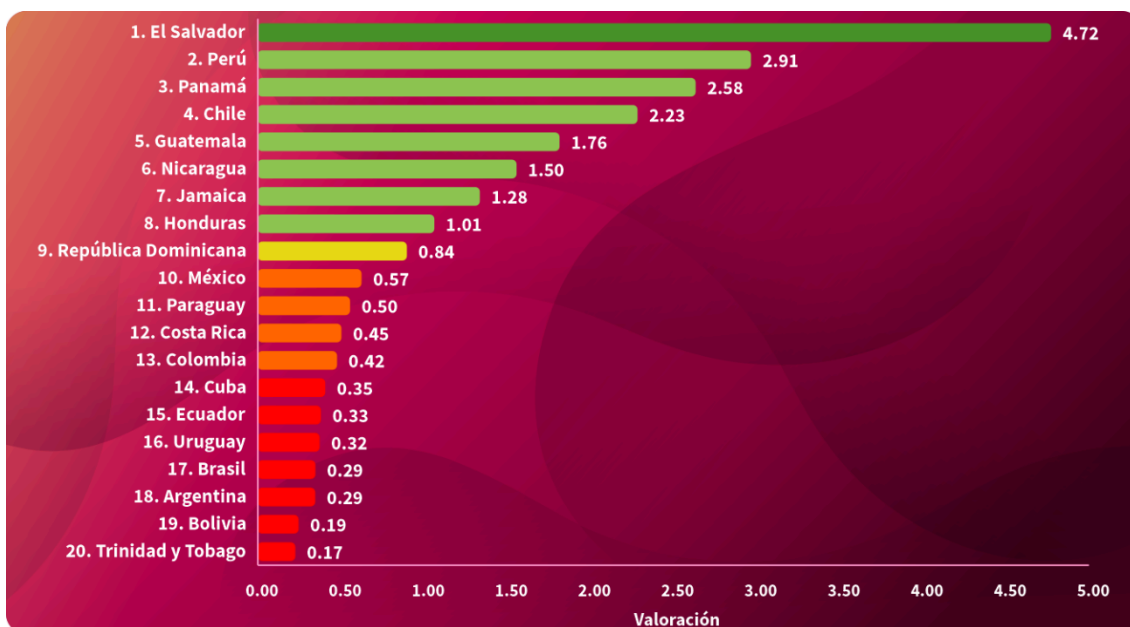
integrar criterios de sostenibilidad en la gestión presupuestaria continúa siendo un desafío transversal en la región.

En el nivel “**Medio Bajo**”, que agrupa a Nicaragua (0.69%), República Dominicana (0.65%), México (0.47%), Costa Rica (0.41%) y Chile (0.40%). El caso de México resulta particularmente relevante por su contradicción estructural: a pesar de su alta biodiversidad y de su papel activo en los compromisos climáticos internacionales, su gasto en sectores sostenibles es marginal. Esta brecha entre el potencial ambiental y asignación fiscal sugiere una desconexión entre la política ambiental y la planificación presupuestaria.

La mayoría de los países analizados se concentran en los niveles “**Bajo**”, entre ellos Colombia (0.39%), Ecuador (0.32%), Uruguay (0.31%), Brasil (0.28%), Paraguay (0.27%), Trinidad y Tobago (0.17%), Argentina (0.17%), Panamá (0.13%) y Bolivia (0.12%). Estos países destinan menos del 0.5% del presupuesto a sectores sostenibles. La situación de los países amazónicos – Brasil, Bolivia, Colombia y Ecuador – resulta especialmente crítica, dada su relevancia en la regulación climática global. La insuficiente asignación de recursos hacia la sostenibilidad en estos países presenta una asimetría entre la importancia ambiental del territorio y las prioridades fiscales nacionales, lo que podría profundizar vulnerabilidades frente a crisis climática y la pérdida de capital natural.

La incorporación de los nuevos sectores – **conservación de océanos y transporte sostenible** – amplía el alcance temático de la medición de los Presupuestos Sostenibles, permitiendo una evaluación más integral de los esfuerzos fiscales vinculados a la sostenibilidad ambiental. No obstante, los resultados muestran que las variaciones derivadas de esta ampliación son marginales y no alteran de manera sustancial las tendencias estructurales observadas en ediciones anteriores del índice para esta variable. En otras palabras, la inclusión de estos sectores mejora la precisión metodológica y la representatividad temática del indicador, pero no implica un cambio real en la orientación de los presupuestos nacionales hacia la sostenibilidad.

Gráfica 13. Ranking de Presupuestos Sostenibles 2025, considerando los nuevos sectores de conservación de océanos y transporte sostenible (% del total) datos a 2024




Fuente. Elaboración propia con base en documentos fiscales de los 20 países analizados, correspondientes al año 2024.

El Salvador mantiene la mayor asignación (4.72%) del gasto total a sectores sostenibles, ubicándose en el nivel “**Alto**” del indicador y consolidando su posición como el país con mayor alineación fiscal hacia la sostenibilidad. Le siguen Perú (2.91%), Panamá (2.58%) y Chile (2.23%), Guatemala (1.76%), Nicaragua (1.50%), Jamaica (1.28%) y Honduras (1.01%), todos en el nivel “**Medio Alto**”. No obstante, los incrementos registrados en casos como Panamá y Chile responden principalmente, a la inclusión de estos sectores y no a un fortalecimiento estructural de las asignaciones sostenibles. En este sentido, los aumentos reflejan ajustes metodológicos más que transformaciones institucionales. La ampliación del marco analítico permite contabilizar un espectro más amplio del gasto, pero no necesariamente evidencia un compromiso fiscal más robusto o sostenido con la sostenibilidad ambiental.

En el nivel “**Medio**” se ubica República Dominicana (0.84%), país que, pese a mostrar un ligero incremento respecto a la edición previa, mantiene una asignación aún limitada. En el nivel “**Medio Bajo**” se encuentran México (0.57%), Paraguay (0.50%), Costa Rica (0.45%) y Colombia (0.42%), cuyos porcentajes muestran la persistencia de una baja priorización del gasto sostenible dentro de las estructuras presupuestarias.

El caso de México y Colombia es particularmente llamativo, a pesar de ser países con una mayor biodiversidad y de contar con un marco institucional relativamente sólido en materia ambiental, sus gastos en sectores sostenibles continúan siendo marginales. Esta desconexión entre potencial ambiental, compromisos internacionales y asignación fiscal refleja una falla estructural en la integración de la sostenibilidad en la política presupuestaria y limita la capacidad del país para cumplir de manera efectiva con sus metas de mitigación y adaptación climática.



En el nivel “**Bajo**”, que agrupa la mayoría de los países, se ubican Cuba (0.35%), Ecuador (0.33%), Uruguay (0.32%), Brasil (0.29%), Argentina (0.29%), Bolivia (0.19%) y Trinidad y Tobago (0.17%), las asignaciones resultan mínimas, incluso en comparación con el tamaño de sus economías o con su relevancia ambiental a nivel global.

Este rezago es particularmente preocupante en los países amazónicos, como Brasil, Colombia y Ecuador, dado su papel central en la regulación climática y en la conservación de la biodiversidad. La baja asignación de recursos a estos sectores sostenibles evidencia una desalineación crítica entre las funciones ecosistémicas que estos territorios cumplen y la atención que reciben en la política fiscal. De mantenerse esta tendencia, la región podría enfrentar mayores vulnerabilidades frente a los impactos del cambio climático y una creciente pérdida de capital natural, con consecuencias socioeconómicas a largo plazo.

En términos comparativos, la evaluación de los escenarios con y sin la incorporación de los nuevos sectores confirman que el gasto público destinado a la sostenibilidad permanece insuficiente, marginal y reactivo. La ampliación metodológica mejora la capacidad de medición del indicador y permite capturar nuevas áreas de acción presupuestal, pero no modifica la conclusión de fondo: la sostenibilidad aún no constituye un eje estructural de la política fiscal en América Latina y el Caribe. En la mayoría de los casos, las asignaciones hacia sectores sostenibles dependen de la disponibilidad de recursos externos, lo que limita la autonomía fiscal de los países para sostener estos esfuerzos en el tiempo.

El análisis de esta variable evidencia que, en términos monetarios, los países de estudio destinaron en conjunto 13.1 mil millones de dólares a actividades catalogadas como sostenibles durante 2024. Si bien este monto refleja un avance en la integración de criterios ambientales dentro de la política fiscal, su peso relativo sigue siendo reducido: en total, estas asignaciones representan menos del 1% del presupuesto agregado de los países analizados. Esta proporción limitada pone de manifiesto la brecha existente entre los compromisos climáticos y ambientales asumidos por los gobiernos y los recursos efectivamente destinados para concretarlos.

Brasil fue el país que registró la mayor asignación presupuestaria en términos absolutos, con 2.9 mil millones de dólares. Sin embargo, esta cifra equivale apenas al 0.29% de su presupuesto total, lo que evidencia que, pese a su volumen, el esfuerzo fiscal sigue siendo moderado frente a la magnitud de los retos ambientales. Dentro de su estructura de gasto, las actividades relacionadas con el cambio climático concentraron la mayor proporción de recursos, alcanzando 1.9 mil millones de dólares. En segundo lugar, se ubicó México, con 2.8 mil millones de dólares, donde la mayor asignación correspondió a la atención de desastres naturales, que absorbió 998 millones de dólares. Este patrón refleja la prioridad que ambos países han otorgado a la gestión de riesgos climáticos y a las acciones de respuesta ante emergencias ambientales.

En la siguiente tabla se presenta el desglose del presupuesto asignado a cada uno de los sectores que conforman la variable de Presupuestos Sostenibles, lo que permite observar con mayor detalle la distribución del gasto sostenible en la región.

Tabla 5. Presupuesto asignado a los sectores que integran la variable de Presupuestos Sostenibles, en dólares (2024).

País	Presupuesto total	Presupuesto de la variable de Presupuestos Sostenibles (PS)	Presupuesto de la variable de PS: Desastres Naturales	Presupuesto de la variable de PS: Biodiversidad	Presupuesto de la variable de PS: Cambio Climático	Presupuesto de la variable de PS: Eficiencia Energética	Presupuesto de la variable de PS: Energía Renovable	Presupuesto de la variable de PS: Forestal	Presupuesto de la variable de PS: Conservación de Océanos	Presupuesto de la variable de PS: Transporte Sostenible
Argentina	105,012,368,052	308,556,276	17,803,198	54,663	54,932,483	16,218,536	Sin datos	90,299,259	Sin datos	129,248,137
Bolivia	49,250,068,088	95,643,648	53,848	10,647,747	2,754,515	1,672,360	7,774,316	34,007,683	Sin datos	38,733,179
Brasil	1,004,821,840,946	2,960,296,265	313,908,722	153,398,989	1,984,253,363	Sin datos	403,846,889	Sin datos	9,346,619	95,541,683
Chile	89,127,172,856	1,988,817,938	24,532,666	14,904,778	73,040,182	14,180,148	12,306,127	220,743,153	377,161	1,628,733,723
Colombia	100,155,007,855	424,730,514	227,989,203	75,447,457	41,619,580	Sin datos	1,349,881	39,198,396	1,227,164	37,898,833
Costa Rica	24,541,376,691	110,650,546	15,325,692	53,361,010	Sin datos	Sin datos	446,120	32,528,212	515,144	8,474,368
Cuba	20,029,445,833	70,833,333	Sin datos	Sin datos	Sin datos	Sin datos	Sin datos	Sin datos	Sin datos	Sin datos
Ecuador	35,384,852,653	115,908,061	39,716,828	53,449,811	9,299,306	2,473,284	8,147,783	Sin datos	2,821,049	Sin datos
El Salvador	9,068,694,112	428,022,650	9,943,450	1,914,090	17,200,000	Sin datos	393,486,470	5,478,640	Sin datos	Sin datos
Guatemala	15,062,998,124	265,608,051	160,484,905	25,907,261	22,705,268	1,069,892	49,377	54,137,510	1,253,838	Sin datos
Honduras	16,417,308,469	165,771,679	48,227,396	7,767,930	1,149,023	94,674,609	2,090,064	11,159,155	703,502	Sin datos
Jamaica	8,572,416,047	110,068,280	23,222,831	17,577,052	44,167,351	9,774,863	Sin datos	11,066,282	4,259,901	Sin datos
México	495,280,850,393	2,834,659,040	998,460,456	35,900,186	23,272,862	69,976,568	911,840,873	298,511,717	Sin datos	496,696,378
Nicaragua	4,267,995,129	64,188,439	2,922,186	1,651,091	73,213	2,765,157	16,445,222	5,763,578	Sin datos	34,567,992
Panamá	30,690,395,220	792,075,747	12,493,672	8,372,848	Sin datos	7,312,801	Sin datos	12,156,190	Sin datos	751,740,236
Paraguay	15,421,298,621	77,519,872	8,070,176	7,158,009	1,333,946	449,721	19,838,320	4,896,067	Sin datos	35,773,633
Perú	64,149,985,786	1,869,600,383	709,555,229	141,837,985	1,646,340	Sin datos	Sin datos	59,857,497	Sin datos	956,703,332
República Dominicana	26,092,344,643	220,220,528	15,952,497	28,401,506	3,269,352	316,569	79,777,267	41,331,362	4,121,928	47,050,047
Trinidad y Tobago	9,256,744,471	16,057,392	2,048,511	20,148	1,067,980	3,062	6,469,512	6,448,179	Sin datos	Sin datos
Uruguay	24,271,494,924	77,711,389	66,837,536	4,100,923	1,378,678	Sin datos	Sin datos	3,778,032	Sin datos	1,616,220

Fuente. Elaboración propia con base en documentos fiscales de los 20 países analizados, correspondientes al año 2024.

En síntesis, el análisis de los Presupuestos Sostenibles revela una brecha persistente entre los compromisos ambientales de la región y la acción fiscal necesaria para materializarlos. A pesar de la creciente exposición a riesgos climáticos y del reconocimiento explícito de la urgencia de actuar, la asignación de recursos públicos orientados a la sostenibilidad continúa siendo limitada y, en muchos casos, marginal dentro de la estructura presupuestaria. Incluso en países con alto potencial ambiental o elevada vulnerabilidad, el gasto sostenible no supera una fracción mínima del presupuesto total, lo que confirma que la sostenibilidad aún no se consolida como un eje rector de la política económica.

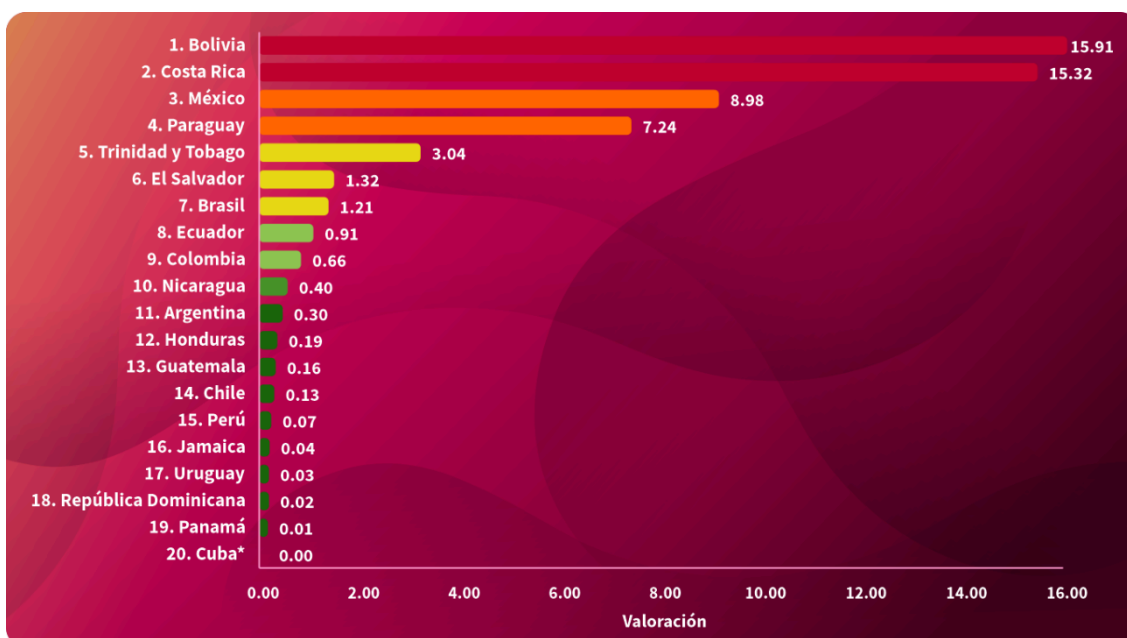
Esta brecha resulta especialmente relevante a la luz del Artículo 2.1.c del Acuerdo de París, que exhorta a alinear los flujos financieros—incluidos los presupuestos públicos—con una trayectoria compatible con bajas emisiones de carbono y resiliencia climática. Sin un aumento sostenido y estratégico de la inversión pública en sectores sostenibles, los países de la región corren el riesgo de profundizar su dependencia de actividades intensivas en carbono, limitar su capacidad de adaptación y desacelerar el cumplimiento de sus compromisos internacionales.

Cerrar esta brecha requiere incorporar de manera transversal los criterios de sostenibilidad en la planificación y programación presupuestaria, fortalecer los marcos normativos y metodológicos para clasificar y monitorear el gasto sostenible, y asegurar mecanismos institucionales de rendición de cuentas que permitan evaluar el impacto real de estas asignaciones. Una transformación estructural en los sistemas fiscales—más coherente, transparente y orientada a resultados—es indispensable para avanzar hacia una política presupuestaria que no solo responda a los desafíos ambientales actuales, sino que también contribuya a la reconfiguración de los flujos financieros en línea con las metas globales de clima y desarrollo sostenible.

Presupuestos Intensivos en Carbono


La variable de Presupuestos Intensivos en Carbono (PIC) evalúa la proporción del gasto público que los gobiernos destinan a actividades con alto impacto en la generación de gases contaminantes. Esto incluye el financiamiento de la explotación, exploración, extracción y refinación de hidrocarburos, así como los recursos asignados a empresas estatales vinculadas a la producción y comercialización de petróleo, gas o carbón. La estimación se realizó a partir del porcentaje que dichos rubros representan del presupuesto total aprobado para 2024, utilizando información oficial proveniente principalmente de las leyes de presupuesto nacionales, los reportes de ejecución financiera y los informes del sector energético. En el caso de Cuba, la ausencia de información desagregada impidió la estimación de la variable.

Gráfica 14. Ranking de Presupuestos Intensivos en Carbono 2025 (% del total) datos a 2024



Fuente. Elaboración propia con base en documentos fiscales de los 20 países analizados, correspondientes al año 2024.

Para Bolivia (15.91%) y Costa Rica (15.32%) se evidencia que son los países con la mayor proporción del gasto público orientado a actividades intensivas en carbono, ubicándose ambos en el nivel “**Muy Alto**”. En términos absolutos, Bolivia destinó alrededor de 7.8 mil millones de dólares, mientras que Costa Rica asignó 3.7 mil millones, cifras ligeramente menores a las reportadas en la edición anterior (17.83% y 16.58%, respectivamente). Aún con esta disminución, los niveles observados continúan revelando una dependencia estructural del gasto público respecto a sectores emisores. Este patrón de asignación reproduce modelos de desarrollo basados en la extracción de recursos fósiles, restringe el avance hacia una matriz productiva baja en carbono y limita la coherencia entre la política fiscal y los compromisos internacionales de mitigación.



En el nivel “**Medio Alto**”, se ubican México (8.98%) y Paraguay (7.24%). En el caso de México, si bien se observa una leve reducción respecto a la edición anterior (de 10.65% a 8.98%), el país continúa mostrando una alta concentración presupuestaria en Petróleos Mexicanos (PEMEX) y en programas asociados al sector de hidrocarburos. Esta orientación refuerza un patrón de gasto anclado en una matriz energética dependiente del petróleo, lo que contradice los objetivos de descarbonización y dificulta la transición hacia fuentes sostenibles. La ausencia de una estrategia clara de reorientación del gasto hacia energías renovables, eficiencia energética o movilidad sostenible ilustra una brecha entre el discurso climático y la acción presupuestaria efectiva.

El nivel “**Medio**” agrupa a Trinidad y Tobago (3.04%), El Salvador (1.32%) y Brasil (1.21%). En el caso de Trinidad y Tobago, pese a su histórica dependencia del sector energético, se observa una tendencia gradual a la baja, aunque el gasto destinado a hidrocarburos sigue siendo significativo. Brasil, por su parte, mantiene una asignación moderada, pero concentrada en infraestructura y subsidios relacionados con la explotación de recursos naturales.

En el nivel “**Medio Bajo**”, se ubican Ecuador (0.91%) y Colombia (0.66%), países con economías tradicionalmente dependientes del petróleo. Si bien estos resultados podrían interpretarse como un menor grado de dependencia fiscal respecto a los sectores fósiles, la baja proporción muestra restricciones fiscales o limitaciones de inversión pública, más que una decisión deliberada de descarbonización.

En el nivel “**Bajo**” se encuentra Nicaragua (0.40%), y en el “**Muy Bajo**” destacan Argentina (0.30%), Honduras (0.19%), Guatemala (0.16%), Chile (0.13%), Perú (0.07%), Jamaica (0.04%), Uruguay (0.03%), República Dominicana (0.02%) y Panamá (0.01%). Aunque sus proporciones son menores en comparación con años anteriores, este resultado puede subestimar el gasto indirecto destinado a infraestructura, subsidios o incentivos fiscales que mantienen operativas las cadenas extractivas.

El análisis de esta variable muestra que, en términos agregados, los países de la región destinaron 71.3 mil millones de dólares a actividades intensivas en carbono durante 2024. Esta cifra confirma la persistencia de flujos públicos orientados a sectores que, por su naturaleza, son incompatibles con una trayectoria de descarbonización acelerada. La magnitud de estos recursos no solo refleja la inercia estructural de las economías latinoamericanas, sino que también evidencia la urgencia de avanzar hacia una reorientación presupuestaria que contribuya de manera efectiva al cumplimiento del Artículo 2.1.c del Acuerdo de París, el cual establece la necesidad de alinear los flujos financieros con un desarrollo resiliente y de bajas emisiones.

En términos absolutos, México fue el país que concentró la mayor cantidad de recursos asignados a actividades intensivas en carbono, con 44.4 mil millones de dólares, equivalentes al 8.98% de su presupuesto total. Si bien esta proporción es menor comparada con otros países, el volumen de recursos involucrados refleja un desafío fiscal considerable para avanzar hacia una estructura presupuestaria coherente con los objetivos climáticos nacionales. La magnitud de estos flujos también ilustra la relevancia del sector de hidrocarburos dentro de su política fiscal, lo que condiciona el ritmo y profundidad de la transición.

Brasil se ubicó en segundo lugar, con 12.1 mil millones de dólares. Sin embargo, este monto representó únicamente el 1.21% de su presupuesto total, lo que evidencia un menor peso relativo de las actividades intensivas en carbono dentro de su matriz fiscal.

En contraste, países como Bolivia y Costa Rica muestran niveles de dependencia más pronunciados. Bolivia asignó 7.8 mil millones de dólares a actividades intensivas en carbono, mientras que Costa Rica destinó 3.7 mil millones de dólares; en ambos casos, estos recursos superan el 15% de sus presupuestos totales. Esta elevada proporción evidencia una fuerte dependencia fiscal de actividades emisoras y un mayor riesgo de rezago frente a los procesos de transición sostenible. Además, sugiere que cualquier reducción futura en estos ingresos podría generar tensiones fiscales, lo que resalta la necesidad de estrategias integrales de diversificación económica.


En la siguiente tabla se presenta el desglose del presupuesto destinado a la variable de Presupuestos Intensivos en Carbono para cada país analizado.

Tabla 6. Presupuesto destinado a la variable de Presupuestos Intensivos en Carbono, en dólares (2024)

País	Presupuesto total	Presupuesto de la variable de Presupuestos Intensivos en Carbono (PIC)	Presupuesto de la variable PIC: Hidrocarburos
Argentina	105,012,368,052	312,462,346	312,462,346
Bolivia	49,250,068,088	7,836,717,120	7,836,717,120
Brasil	1,004,821,840,946	12,157,674,249	12,157,674,249
Chile	89,127,172,856	116,810,228	116,810,228
Colombia	100,155,007,855	665,871,355	665,871,355
Costa Rica	24,541,376,691	3,759,728,892	3,759,728,892
Cuba	20,029,445,833	Sin datos	Sin datos
Ecuador	35,384,852,653	322,246,474	322,246,474
El Salvador	9,068,694,112	119,894,470	119,894,470
Guatemala	15,062,998,124	24,223,886	24,223,886
Honduras	16,417,308,469	31,677,259	31,677,259
Jamaica	8,572,416,047	3,369,270	3,369,270
México	495,280,850,393	44,477,588,152	44,477,588,152
Nicaragua	4,267,995,129	16,971,150	16,971,150
Panamá	30,690,395,220	1,887,861	1,887,861
Paraguay	15,421,298,621	1,115,949,099	1,115,949,099
Perú	64,149,985,786	46,402,855	46,402,855
República Dominicana	26,092,344,643	6,199,714	6,199,714
Trinidad y Tobago	9,256,744,471	281,806,706	281,806,706
Uruguay	24,271,494,924	6,631,568	6,631,568

Fuente. Elaboración propia con base en documentos fiscales de los 20 países analizados, correspondientes al año 2024.

En conjunto, la variable de Presupuestos Intensivos en Carbono evidencia que la región continúa anclada a un modelo de financiamiento público que privilegia actividades con altos niveles de emisiones y externalidades ambientales. Esta dependencia no solo limita el ritmo



de la transición energética y productiva, sino que también reduce el margen fiscal disponible para impulsar sectores estratégicos asociados a la descarbonización, la resiliencia climática y la diversificación económica.

El comportamiento observado sugiere que, en muchos países, el gasto intensivo en carbono se ha consolidado como un componente estructural dentro del diseño presupuestario. Esto dificulta la posibilidad de reconfigurar las políticas fiscales y de gasto en consonancia con el Artículo 2.1.c del Acuerdo de París. Mientras estos flujos capturen una proporción significativa de los recursos públicos, la transición hacia modelos de inversión con beneficios ambientales, sociales y económicos de largo plazo seguirá enfrentando barreras sustanciales.

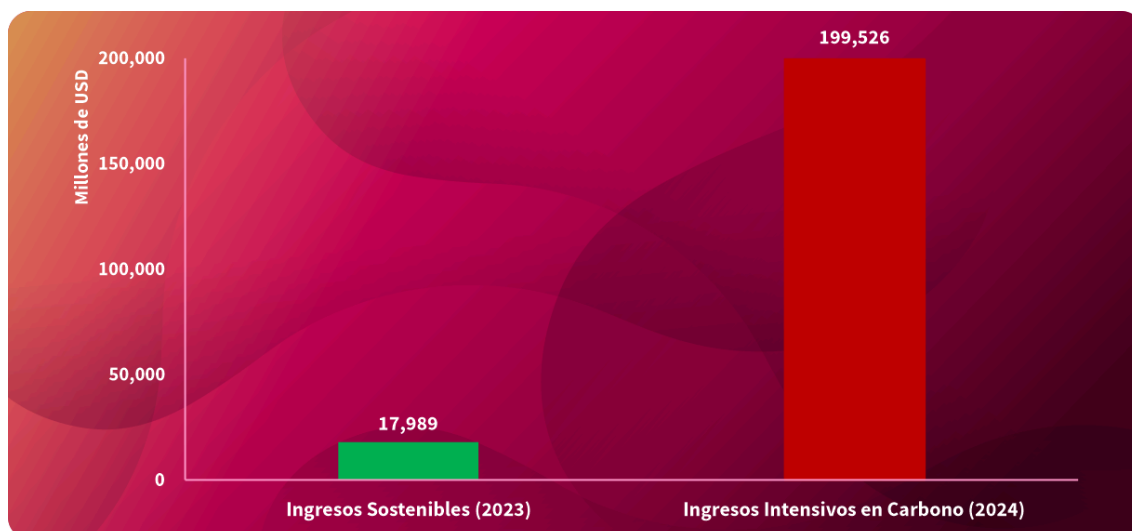
Por ello, la evidencia de esta variable subraya la urgencia de revisar y reordenar las prioridades presupuestarias en la región. Esto implica identificar y desactivar los incentivos que sostienen actividades emisoras, fortalecer los mecanismos para evaluar el impacto ambiental del gasto y generar condiciones institucionales que permitan canalizar mayores recursos hacia sectores estratégicos para la transición. Solo con una reconfiguración profunda del gasto público será posible avanzar hacia un financiamiento coherente con una trayectoria de desarrollo sostenible, resiliente e inclusiva, que prepare a los países para los desafíos climáticos presentes y futuros.

2.3 Análisis comparativo de las variables del Índice de Finanzas Sostenibles

Comparación entre Ingresos Sostenibles e Ingresos Intensivos en Carbono

El análisis comparativo entre los Ingresos Sostenibles (con datos a 2023) y los Ingresos Intensivos en Carbono (con datos a 2024) evidencia la persistencia de una dependencia estructural de las economías de América Latina y el Caribe respecto a los ingresos provenientes de actividades vinculadas a los combustibles fósiles. En conjunto, los 20 países analizados generaron aproximadamente 199.5 mil millones de dólares por concepto de extracción, exportación y comercialización de combustibles, hidrocarburos y minerales, mientras que los ingresos sostenibles alcanzaron apenas 17.9 mil millones de dólares. Esto implica que los ingresos intensivos en carbono fueron 11 veces superiores a los sostenibles.

Gráfica 15. Análisis regional: Ingresos Sostenibles (2023) versus Ingresos Intensivos en Carbono (2024).



Fuente. Elaboración propia con base en datos de la OCDE correspondientes al año 2023 y en documentos fiscales de los 20 países analizados correspondientes al año 2024.

Si bien esta relación representa una mejoría respecto a la edición anterior, cuando los ingresos intensivos en carbono superaron en 19 veces a los sostenibles, el cambio no refleja un avance real en la estructura económica de los países, sino que responde principalmente a ajustes en el año base utilizado para el cálculo, ya que en esta edición se incorporó información más actualizada, correspondiente a 2023. En consecuencia, la región continúa enfrentando el desafío de reducir su dependencia fiscal de sectores extractivos y fortalecer la generación de ingresos alineados con la sostenibilidad y la acción climática.

Esta brecha muestra una clara asimetría estructural en la arquitectura fiscal y económica regional, donde la renta derivada de la explotación de recursos naturales continúa siendo el principal sostén de las finanzas públicas. Tal configuración económica no sólo amplifica la vulnerabilidad fiscal, sino también reproduce patrones de desarrollo incompatibles con las metas de descarbonización y transición justa definidas en los compromisos climáticos.

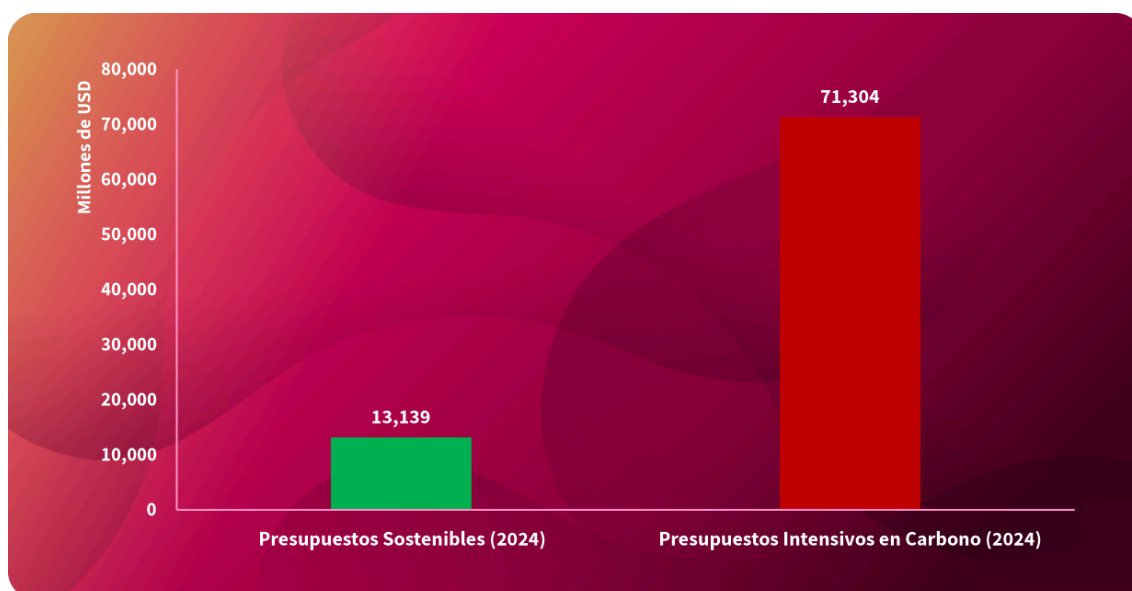
Además, el rezago de los ingresos sostenibles también muestra la limitada capacidad de los países para movilizar estos recursos, ya sea mediante mecanismos de financiamiento climático, incentivos fiscales o alianzas público-privadas orientadas a la sostenibilidad. En la mayoría de los casos, los flujos sostenibles dependen de la cooperación internacional o de iniciativas puntuales, sin consolidarse como fuentes estables de ingreso público. Por el contrario, las rentas fósiles continúan recibiendo apoyo institucional, generando un efecto de bloqueo estructural que perpetúa en la asignación de incentivos fiscales a sectores emisores y desincentiva la innovación verde y la diversificación económica.

Comparación entre Presupuestos Sostenibles y Presupuestos Intensivos en Carbono

El análisis comparativo entre los Presupuestos Sostenibles y los Presupuestos Intensivos en Carbono, con datos correspondientes a 2024, muestra un patrón de asignación del gasto público que refuerza las tendencias observadas en la estructura de ingresos. En promedio,

los países de la región destinaron 71.3 mil millones de dólares a sectores intensivos en carbono, mientras que las asignaciones a programas o actividades con orientación sostenible ascendieron a 13.1 mil millones de dólares.

Gráfica 16. Análisis comparativo: Presupuestos Sostenibles versus Presupuestos Intensivos en Carbono en 2024




Fuente: Elaboración propia con base en documentos fiscales de los 20 países analizados, correspondientes al año 2024.

En términos proporcionales, el gasto en actividades intensivas en carbono fue 5 veces superior al destinado a iniciativas sostenibles. Si bien esta relación presenta una mejoría con respecto a la edición anterior – cuando el gasto intensivo en carbono fue de 12 veces mayor – la reducción de la brecha responde, en parte a una posible reorientación del gasto público, aunque se explica principalmente por los ajustes metodológicos incorporados en esta edición del índice.

Este resultado refleja una incongruencia estructural entre los objetivos climáticos declarados y la práctica presupuestaria. Aunque varios países han incorporado metas de sostenibilidad en sus planes nacionales de desarrollo o estrategias de finanzas sostenibles, la ejecución presupuestaria sigue priorizando sectores con alto impacto ambiental, como la exploración y refinación de hidrocarburos, la expansión de infraestructura fósil y los subsidios a combustibles. En la práctica, esta orientación del gasto compromete la coherencia de las políticas climáticas nacionales, desvía recursos que podrían destinarse a la transición energética y limita la capacidad para impulsar proyectos de adaptación o conservación de ecosistemas estratégicos.

La persistencia de un gasto público intensivo en carbono evidencia una desconexión entre la planificación fiscal y los compromisos climáticos asumidos por los países de la región. Avanzar hacia presupuestos compatibles con los objetivos climáticos exige la implementación de reformas profundas en la estructura del gasto público, la eliminación gradual de los subsidios a los combustibles fósiles, y la integración sistemática de criterios de



sostenibilidad, riesgo climático y co-beneficios ambientales en los procesos de planificación, programación y ejecución presupuestaria.

Solo mediante una reorientación decidida de los recursos públicos hacia sectores sostenibles será posible consolidar una gestión fiscal como motor de un desarrollo bajo en carbono, fortaleciendo al mismo tiempo la resiliencia económica, social y ambiental de América Latina y el Caribe.

Comparación entre el Presupuesto Sostenible y el Presupuesto Necesario Estimado conforme al 2% del PIB propuesto por Stern

Nicholas Stern, en su informe “The Economics of Climate Change: The Stern Review”, plantea que los gobiernos deben destinar al menos 2% de su Producto Interno Bruto (PIB) de manera anual para enfrentar de forma efectiva los desafíos globales del cambio climático. Esta recomendación parte de una premisa fundamental: la inversión temprana y sostenida en mitigación y adaptación resulta significativamente menos costosa que los impactos económicos derivados de la inacción. Stern subraya que el esfuerzo fiscal no debe entenderse como un gasto corriente, sino como una inversión estratégica de largo plazo que fortalece la estabilidad macroeconómica, reduce vulnerabilidades estructurales y previene pérdidas económicas futuras asociadas a eventos climáticos extremos.

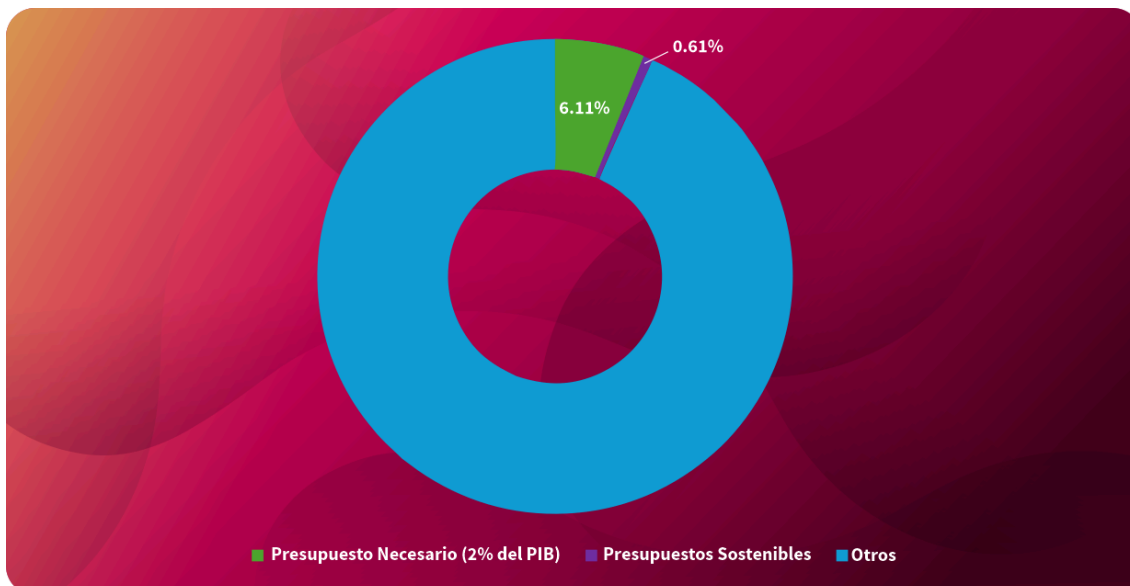
En el caso de América Latina y el Caribe, esta propuesta adquiere una importancia particular. La región se caracteriza por altos niveles de exposición y sensibilidad a los efectos del cambio climático: pérdidas económicas recurrentes por desastres naturales, riesgos hídricos crecientes, afectaciones a infraestructura crítica y múltiples presiones socioambientales. Esta combinación de factores implica que cualquier rezago en la inversión climática incrementa de manera exponencial los costos futuros, reduce la capacidad de recuperación y amplifica desigualdades estructurales.

Bajo este contexto, se analiza qué tan cerca o lejos se encuentran los países de estudio de cumplir con la meta propuesta por Stern. Para ello, se estima el presupuesto que cada país debió asignar en 2024 para alcanzar el umbral del 2% del PIB dirigido a la acción climática. La comparación se realiza con base en la variable Presupuesto Sostenible, que permite cuantificar los recursos efectivamente asignados a sectores clave relacionados con la transición sostenible.

La variable de Presupuesto Sostenible incluye recursos destinados a biodiversidad, cambio climático, energías renovables, eficiencia energética, gestión forestal, conservación marina, transporte sostenible y atención de desastres naturales. Dado su alcance, ofrece una aproximación adecuada para evaluar el nivel de alineación del gasto público con la meta de inversión climática propuesta.

El análisis revela que, en 2024, los 20 países de estudio debieron asignar en conjunto 131.2 mil millones de dólares, equivalentes al 6.11% de sus presupuestos totales, para cumplir con la meta del 2% del PIB. Sin embargo, únicamente destinaron 13.1 mil millones de dólares, es decir, solo el 0.61% de su presupuesto. Esta diferencia muestra que la región se encuentra muy por debajo del nivel de inversión requerido para fortalecer su resiliencia climática y reducir vulnerabilidades sistémicas. Asimismo, señala que los esfuerzos actuales continúan siendo marginales frente a la magnitud del reto.

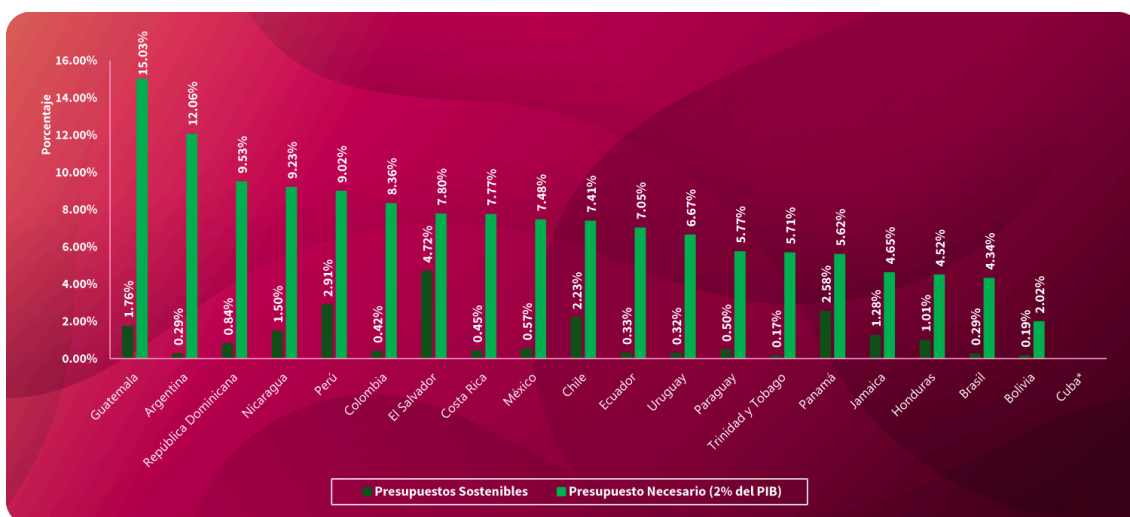
Gráfica 17. Presupuestos Sostenibles versus presupuesto necesario estimado con respecto al 2% del PIB en 2024



Fuente: Elaboración propia con base en documentos fiscales de los 20 países analizados, correspondientes al año 2024.

El estudio país por país confirma que ninguno de los 20 países cumplió con la meta del 2% del PIB. Guatemala registró la mayor brecha: debió asignar el 15.1% de su presupuesto, pero sólo destinó el 1.7% respecto a su PIB. Argentina enfrentó una discrepancia similar: debió asignar alrededor del 12.1%, pero únicamente destinó el 0.29%. En contraste, Bolivia presentó la menor distancia relativa: debía asignar el 2.02%, pero sólo destinó el 0.19%. La gráfica siguiente ilustra estas discrepancias, destacando la magnitud del desfase entre la inversión requerida y la efectivamente asignada.

Gráfica 18. Presupuestos Sostenibles versus presupuesto necesario estimado con respecto al 2% del PIB como porcentaje del presupuesto total para los 20 países de estudio en 2024



Fuente: Elaboración propia con base en documentos fiscales de los 20 países analizados, correspondientes al año 2024.

Los resultados evidencian una brecha estructural de financiamiento climático en América Latina y el Caribe. A pesar de ser una de las regiones más vulnerables a los impactos del cambio climático, los niveles actuales de inversión pública se mantienen muy por debajo de lo necesario para construir resiliencia, reducir riesgos y evitar costos económicos futuros. Cumplir con la meta del 2% del PIB no solo implicaría cerrar una brecha financiera, sino reorientar el modelo de desarrollo, integrando la crisis climática como un eje central de la política fiscal. La insuficiente inversión actual incrementa los costos económicos, sociales y ambientales del mañana; por ello, redefinir las prioridades presupuestarias es una tarea urgente para garantizar un futuro sostenible, seguro y competitivo para la región.

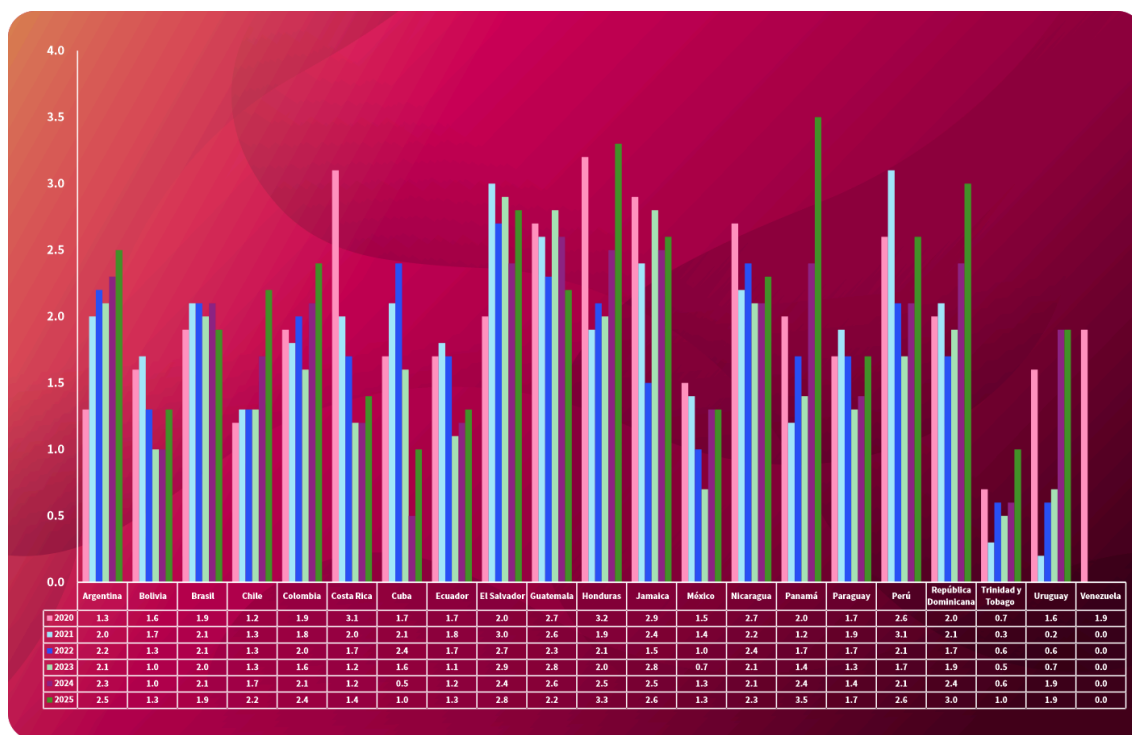
3. Análisis histórico del Índice de Finanzas Sostenibles

Análisis comparativo: Índice de Finanzas Sostenibles


El análisis comparativo del Índice de Finanzas Sostenibles (IFS) a lo largo de sus seis ediciones ofrece una visión amplia y sólida sobre las brechas, desafíos y oportunidades que enfrentan los países de América Latina y el Caribe para avanzar hacia sistemas financieros más sostenibles. Desde su creación, el IFS se ha consolidado como una herramienta fundamental para monitorear y evaluar cómo los países generan y asignan recursos tanto a actividades orientadas a la sostenibilidad como a aquellas que aún mantienen una elevada dependencia de sectores intensivos en carbono. Su metodología ha sido perfeccionada progresivamente para mejorar la precisión de sus estimaciones y permitir análisis más detallados y comparables entre países y a través del tiempo. En esta última edición, la incorporación de los rubros de conservación de océanos y transporte sostenible dentro de la variable de Presupuestos Sostenibles constituye un avance relevante que amplía la capacidad del IFS para capturar la complejidad del financiamiento ambiental en la región.

A lo largo de estos seis años, el IFS ha contribuido a visibilizar con mayor claridad los desafíos estructurales que enfrenta la región para avanzar hacia finanzas más sostenibles, al tiempo que ha identificado oportunidades concretas para cerrar las brechas persistentes. Las variaciones observadas entre países y entre ediciones reflejan la heterogeneidad de los procesos de transición fiscal y la diversidad de capacidades institucionales, prioridades políticas y estructuras económicas presentes en la región.

Gráfica 19. Análisis comparativo del Índice de Finanzas Sostenibles



Fuente: Elaboración propia con base en documentos fiscales de los 20 países analizados, correspondientes al año 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024.



Un primer hito destacado es que, en esta edición, Panamá con una valoración de 3.5 de un máximo de 4.0 puntos, logró ubicarse por primera vez en el nivel de finanzas sostenibles **“Muy Alto”**, un resultado que no se había registrado en las ediciones previas.

En el nivel **“Alto”**, la presencia de países ha fluctuado a lo largo del tiempo: en el IFS 2020 se situaron Honduras (3.2) y Costa Rica (3.1); en el IFS 2021, Perú (3.1) y El Salvador (3.0); en el IFS 2022 ningún país alcanzó esta categoría; en el IFS 2023 apareció El Salvador (2.9); en el IFS 2024 no se registraron países en este nivel; y en el IFS 2025 se posicionaron Honduras (3.3) y República Dominicana (3.0).

En la categoría **“Medio Alto”** también se han observado dinámicas variadas. En 2020 se ubicaron Jamaica (2.9), Guatemala y Nicaragua (2.7), y Perú (2.6). En 2021 figuraron Guatemala (2.6), Jamaica (2.4), Nicaragua (2.2), Brasil, Cuba y República Dominicana (2.1). En 2022 aparecieron El Salvador (2.7), Cuba y Nicaragua (2.4), y Guatemala (2.3). En 2023 destacaron Guatemala y Jamaica (2.8). En 2024 se posicionaron Guatemala (2.6), Honduras y Jamaica (2.5), El Salvador, Panamá y República Dominicana (2.4), así como Argentina (2.3). En 2025 se ubicaron El Salvador (2.8), Jamaica y Perú (2.6), Argentina (2.5), Colombia (2.4) y Nicaragua (2.3).

En el nivel **“Medio”**, el IFS 2020 incluyó a El Salvador, Panamá y República Dominicana (2.0). En 2021 se posicionaron Argentina y Costa Rica (2.0). Para 2022 se registraron Argentina (2.2), Honduras y Perú (2.1), Brasil (2.0) y Colombia (1.9). En 2023 figuraron Argentina y Nicaragua (2.1), Brasil y Honduras (2.0), y República Dominicana (1.9). En 2024 se ubicaron Brasil, Colombia, Nicaragua y Panamá (2.1), así como Uruguay (1.9). Finalmente, en 2025 se situaron Chile y Guatemala (2.2), junto con Brasil y Uruguay (1.9).

La categoría **“Medio Bajo”** ha concentrado históricamente a un número importante de países. En 2020 se incluyeron Brasil, Colombia y Venezuela (1.9), Cuba, Ecuador y Paraguay (1.7), y Bolivia y Uruguay (1.6). En 2021 se posicionaron Honduras y Paraguay (1.9), Colombia y Ecuador (1.8) y Bolivia (1.7). En 2022 figuraron Costa Rica, Ecuador, Panamá, Paraguay y República Dominicana (1.7), Jamaica (1.5), y Bolivia y Chile (1.3). En 2023 ingresaron Perú (1.7), Colombia y Cuba (1.6), Panamá (1.4), Chile y Paraguay (1.3) y Costa Rica (1.2). Para 2024 se situaron Chile (1.7), Paraguay (1.4), México (1.3) y Costa Rica y Ecuador (1.2). En 2025 se registraron Paraguay (1.7), Costa Rica (1.4), y Bolivia, Ecuador y México (1.3).

En el nivel **“Bajo”**, el IFS 2020 incluyó a México (1.5), Argentina (1.3) y Chile (1.2). En 2021 se posicionaron México (1.4), Chile (1.3) y Panamá (1.2). Para 2022 se ubicaron México (1.0), Trinidad y Tobago y Uruguay (0.6). En 2023 figuraron Ecuador (1.1), Bolivia (1.0) y México y Uruguay (0.7). En 2024 se incluyeron Bolivia (1.0) y Trinidad y Tobago (0.6). En 2025 se registraron Cuba y Trinidad y Tobago (1.0).

Por último, en la categoría **“Muy Bajo”**, Trinidad y Tobago fue el único país en 2020 (0.7). En 2021 se situaron Trinidad y Tobago (0.3) y Uruguay (0.2). En 2022 ningún país se ubicó en este nivel; en 2023 reapareció Trinidad y Tobago (0.5); en 2024 se posicionó Cuba (0.5) debido principalmente a la falta de información en varias variables; y en 2025 nuevamente ningún país se clasificó en esta categoría.

En suma, el histórico comparativo del IFS retrata a una región en proceso de transición, con avances puntuales pero aún marcada por importantes asimetrías y limitaciones estructurales. La mayoría de los países se ha mantenido predominantemente entre los

niveles medio y medio bajo, lo que refleja la dificultad persistente de transformar los sistemas fiscales y presupuestarios hacia un enfoque plenamente alineado con la acción climática. Este panorama reafirma la necesidad de fortalecer las capacidades institucionales, mejorar la calidad y disponibilidad de la información pública y, especialmente, replantear los incentivos presupuestarios que continúan favoreciendo actividades intensivas en carbono. Solo a través de una transformación fiscal profunda y sostenida la región podrá cerrar las brechas identificadas en estos seis años y avanzar hacia un sistema financiero verdaderamente compatible con la sostenibilidad.

Análisis comparativo: Ingresos Sostenibles

El seguimiento evolutivo de la variable de Ingresos Sostenibles a lo largo de las seis ediciones del IFS muestra un escenario diverso y, en muchos casos, desigual. Si bien algunos países han logrado incrementar de manera notable el financiamiento recibido para atender objetivos de biodiversidad y cambio climático, otros aún no logran consolidarse como receptores significativos de estos recursos. En términos generales, se observa una tendencia ascendente en la llegada de financiamiento sostenible a la región; sin embargo, este crecimiento continúa siendo insuficiente frente a la magnitud, complejidad y urgencia de los desafíos climáticos que enfrenta América Latina y el Caribe. Esto indica que, aunque existen señales positivas, la escala de recursos movilizados aún dista de cubrir las necesidades identificadas por los países de estudio, particularmente aquellos con alta vulnerabilidad climática y limitada capacidad fiscal.

La siguiente tabla muestra cómo ha evolucionado la proporción de Ingresos Sostenibles en las seis ediciones del índice para los países analizados.

Tabla 7. Participación porcentual de Ingresos Sostenibles, 2019 - 2024

País	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Argentina	0.06	27.00	27.00	32.07	38.64	21.94
Bolivia	6.60	11.93	11.93	14.32	11.08	27.17
Brasil	5.52	25.14	25.14	21.29	21.28	25.13
Chile	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Colombia	0.89	17.66	17.66	28.90	30.07	25.00
Costa Rica	6.90	40.21	40.21	31.68	9.77	29.38
Cuba	1.49	42.30	42.30	49.96	7.97	37.31
Ecuador	2.31	24.42	24.42	10.81	13.17	23.14
El Salvador	0.40	7.24	7.24	8.46	6.91	24.36
Guatemala	5.00	10.22	10.22	23.02	17.49	8.17
Honduras	3.71	25.86	25.86	32.83	31.22	34.92
Jamaica	1.53	19.79	19.79	5.55	4.71	0.82
México	7.12	20.41	20.41	23.06	36.87	27.40
Nicaragua	3.50	19.97	19.97	17.80	16.88	15.46
Panamá	0.10	19.98	19.98	16.43	16.07	41.44
Paraguay	1.01	20.36	20.36	6.37	6.75	4.17
Perú	4.68	21.00	21.00	13.23	12.83	24.40
República Dominicana	1.12	1.75	1.75	27.48	28.66	49.92
Trinidad y Tobago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Uruguay	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Venezuela	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Fuente: Elaboración propia con base en documentos fiscales de los 20 países analizados, correspondientes al año 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024.

El análisis comparativo revela variaciones significativas entre países. En el caso de Cuba, se registró un aumento del 29.3% respecto a la edición anterior, pasando de 7.97% a 37.31%. No obstante, considerando que en años previos Cuba ha llegado a concentrar alrededor del 40% del financiamiento total para el desarrollo destinado a biodiversidad y cambio climático, este incremento representa más un retorno a sus niveles históricos que un comportamiento excepcional.

Panamá también mostró un crecimiento importante del 25.3%, al pasar de 16.07% a 41.44%. Este desempeño es particularmente relevante, ya que en la mayoría de las ediciones anteriores su financiamiento sostenible se había mantenido en torno al 20%, lo que sugiere un fortalecimiento reciente de su capacidad institucional y de su posicionamiento para atraer recursos alineados con la sostenibilidad.

En República Dominicana, los Ingresos Sostenibles aumentaron 21.2% al pasar de 28.66% a 49.92%, consolidando una tendencia ascendente observada en ediciones previas y reflejando una mayor articulación con mecanismos de cooperación internacional y con fuentes de financiamiento climático y de biodiversidad.

En contraste, Argentina registró la mayor disminución, pasando de 38.64% a 21.94%, lo que representa una reducción del 16.7%. Le siguen México, con una disminución del 9.4% (de 36.87% a 27.40%), y Guatemala, que presentó una caída de 9.3% (de 17.49% a 8.17%). Estas reducciones pueden asociarse a reconfiguraciones en la oferta de financiamiento externo, cambios en las prioridades institucionales o limitaciones en la capacidad técnica para formular y gestionar proyectos susceptibles de recibir financiamiento sostenible.

Es importante señalar que Chile, Trinidad y Tobago y Uruguay no registran financiamiento en esta categoría en ninguna de las ediciones analizadas, lo que evidencia diferencias estructurales en los mecanismos de cooperación internacional, así como posibles brechas en la demanda, gestión o registro de recursos vinculados a objetivos ambientales.

Respecto a la disponibilidad de datos, la edición IFS 2020 utilizó información correspondiente a 2018. Las ediciones 2021 y 2022 emplearon datos de 2020 debido a la ausencia de actualizaciones. Para las ediciones 2023 y 2024 se utilizaron datos correspondientes a 2021, siendo relevante que el IFS 2024 incorporó por primera vez información específica sobre financiamiento para biodiversidad. Finalmente, el IFS 2025 integró datos de 2023.

En conjunto, el análisis comparativo de los Ingresos Sostenibles confirma una tendencia hacia un mayor flujo de recursos destinados a objetivos de biodiversidad y cambio climático en la región. Sin embargo, persisten países que reciben montos limitados, lo que profundiza las asimetrías en la capacidad de avanzar hacia una transición sostenible. Esto subraya la necesidad de fortalecer las capacidades nacionales para acceder y gestionar financiamiento sostenible, diversificar las fuentes de cooperación, mejorar los mecanismos de reporte y transparencia, y articular estrategias nacionales que permitan aprovechar plenamente las oportunidades financieras disponibles. Solo a través de estos esfuerzos será posible cerrar las brechas actuales y garantizar que el financiamiento fluya de manera más equitativa y alineada con las prioridades climáticas y de biodiversidad de la región.

Análisis comparativo: Ingresos Intensivos en Carbono

El análisis comparativo de la variable de Ingresos Intensivos en Carbono a lo largo de las seis ediciones del IFS revela un desafío estructural persistente en América Latina y el Caribe: la elevada dependencia económica de sectores con altos niveles de emisiones. En numerosos países, estos ingresos continúan representando una proporción sustancial de la recaudación total, lo que dificulta avanzar hacia estructuras fiscales más sostenibles y resilientes.

En este contexto, resulta evidente que la permanencia de estos flujos no únicamente responde a la relevancia económica de los sectores emisores, sino también a la ausencia de mecanismos fiscales alternativos que permitan sustituir de manera gradual y segura la recaudación proveniente de actividades intensivas en carbono. La falta de reformas tributarias enfocadas en ampliar bases fiscales sostenibles, reducir subsidios a combustibles fósiles o diversificar las fuentes de ingreso público contribuye a perpetuar un patrón de dependencia que tensiona la viabilidad de la transición climática.


La siguiente tabla presenta la proporción que representan los Ingresos Intensivos en Carbono en los países analizados a lo largo de las seis ediciones del índice.

Tabla 8. Participación porcentual de Ingresos Intensivos en Carbono, 2019 - 2024

País	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Argentina	5.14	0.95	0.44	1.19	1.60	2.21
Bolivia	6.57	4.33	5.91	5.13	3.98	3.75
Brasil	4.09	1.58	0.82	1.11	4.55	3.49
Chile	10.47	10.93	15.32	10.23	8.65	8.67
Colombia	10.00	11.23	4.29	16.87	5.79	1.73
Costa Rica	5.58	4.77	8.10	10.65	4.66	6.87
Cuba	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ecuador	28.54	21.78	35.42	38.76	37.08	35.29
El Salvador	0.26	0.28	0.21	0.14	1.31	1.69
Guatemala	4.70	3.55	2.87	3.92	4.01	6.01
Honduras	0.40	0.00	0.00	0.00	0.11	0.54
Jamaica	0.11	0.07	0.07	0.10	0.06	0.51
México	23.51	17.41	24.23	36.35	33.64	28.60
Nicaragua	8.37	8.19	7.55	7.93	6.69	5.93
Panamá	1.20	1.26	0.98	1.14	1.24	1.84
Paraguay	3.01	2.92	2.34	2.45	2.38	1.94
Perú	12.15	10.89	17.98	20.64	14.92	14.39
República Dominicana	9.87	6.74	10.25	8.11	6.66	7.83
Trinidad y Tobago	19.25	20.78	21.08	20.68	31.16	14.66
Uruguay	5.79	8.63	4.79	3.56	3.41	3.51
Venezuela	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Fuente: Elaboración propia con base en documentos fiscales de los 20 países analizados, correspondientes al año 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024.

El análisis comparativo muestra que Ecuador y México son los países que generan la mayor proporción de recursos provenientes de estas actividades. En Ecuador, durante las últimas cuatro ediciones del IFS, los ingresos intensivos en carbono han superado el 35% del total de



su recaudación. Para México, estos ingresos han oscilado alrededor del 30% en la mayoría de las ediciones. Si bien Ecuador registró una ligera disminución de 1.7 puntos porcentuales —de 37.08% a 35.29%— y México una reducción de 5.1 puntos —de 33.64% a 28.60%— ambos países mantienen niveles elevados de dependencia fiscal del carbono.

Esto resalta la urgencia de consolidar fuentes alternativas de financiamiento que permitan reducir progresivamente su exposición a actividades emisoras y mejorar la consistencia de sus trayectorias fiscales con la descarbonización.

En esta edición destaca el caso de Trinidad y Tobago, que registró una disminución de 16.5 puntos porcentuales, al pasar de 31.16% a 14.66%. Esta caída está asociada a una reducción significativa en la recaudación del sector de hidrocarburos, lo cual evidencia la vulnerabilidad inherente de las economías que dependen fuertemente de actividades extractivas. Aunque la reducción disminuye el peso relativo del carbono en sus ingresos, también abre interrogantes sobre la estabilidad fiscal y la capacidad del país para compensar dicha caída con otras fuentes de recaudación.

En contraste, Costa Rica y Guatemala experimentaron incrementos relevantes. Costa Rica pasó de 4.66% a 7.83%, un aumento de 2.2 puntos porcentuales, aunque inferior al máximo registrado en 2021 (10.25%). Guatemala, por su parte, pasó de 4.01% a 6.01%, aumentando en 2 puntos porcentuales. Si bien estas variaciones son más moderadas, reflejan dinámicas fiscales cambiantes que podrían responder a presiones sectoriales o a modificaciones en la estructura de ingresos nacionales.

En términos evolutivos, los resultados muestran que la ligera disminución observada en esta última edición no representa un cambio estructural relevante en la región. Los niveles de dependencia siguen siendo elevados, y los ajustes registrados son marginales frente al tamaño del desafío. Esto confirma que la región continúa atrapada en una arquitectura fiscal que privilegia actividades intensivas en carbono y que, de no modificarse, limitará la capacidad para implementar estrategias de transición ordenada, justa y financieramente viable.

En este sentido, complementar estos esfuerzos exige avanzar en reformas fiscales que incluyan la eliminación progresiva de subsidios a combustibles fósiles, el fortalecimiento de impuestos ambientales, la adopción de mecanismos de mercado —como precios al carbono o sistemas de comercio de emisiones— y la diversificación de las fuentes de ingreso público hacia sectores alineados con la sostenibilidad. Sin estas transformaciones, la región continuará expuesta a la volatilidad de los sectores emisores y alejada de un sistema fiscal coherente con las metas climáticas globales.

Análisis comparativo: Presupuestos Sostenibles

El análisis comparativo de la variable de Presupuestos Sostenibles en las seis ediciones del índice evidencia que la región de América Latina continúa destinando una proporción muy reducida de sus recursos públicos a actividades vinculadas con la sostenibilidad ambiental y climática. En promedio, los países han asignado menos del 1% de su presupuesto total a estas actividades, y en la edición más reciente la cifra se ubicó en apenas 0.61%. Este resultado envía un mensaje contundente: el gasto público orientado explícitamente a la sostenibilidad sigue ocupando un espacio marginal dentro de las prioridades presupuestarias de la región. Esta baja asignación no solo limita la capacidad de respuesta

frente a la crisis climática y de biodiversidad, sino que también compromete la posibilidad de planificar transiciones económicas de mediano y largo plazo que requieran inversiones sostenidas.

La siguiente tabla presenta la proporción que representan los Presupuestos Sostenibles en los países analizados a lo largo de las seis ediciones del índice.

Tabla 9. Participación porcentual de Presupuestos Sostenibles, 2019 - 2024

País	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Argentina	0.08	0.05	0.05	0.05	0.14	0.29
Bolivia	0.01	0.29	0.20	0.09	0.14	0.19
Brasil	0.05	0.02	0.01	0.05	0.15	0.29
Chile	0.06	0.06	0.04	0.05	0.32	2.23
Colombia	0.54	0.18	0.23	0.28	0.24	0.42
Costa Rica	0.46	0.04	0.04	0.04	0.65	0.45
Cuba	0.42	0.35	5.51	1.49	0.49	0.35
Ecuador	0.15	0.13	0.11	0.04	0.18	0.33
El Salvador	0.03	0.29	0.75	2.11	3.16	4.72
Guatemala	0.10	0.10	0.27	2.91	1.35	1.76
Honduras	0.28	0.26	0.26	0.23	0.27	1.01
Jamaica	0.58	1.42	0.00	1.52	0.66	1.28
México	0.05	0.08	0.05	0.04	0.37	0.57
Nicaragua	0.48	0.39	0.41	0.53	0.67	1.50
Panamá	0.00	0.01	0.12	0.11	0.11	2.58
Paraguay	0.10	0.08	0.07	0.08	0.10	0.50
Perú	0.12	1.90	0.11	0.19	0.85	2.91
República Dominicana	0.05	0.03	0.04	0.03	0.39	0.84
Trinidad y Tobago	0.02	0.00	0.02	0.01	0.17	0.17
Uruguay	0.00	0.00	0.00	0.01	0.26	0.32
Venezuela	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Fuente: Elaboración propia con base en documentos fiscales de los 20 países analizados, correspondientes al año 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024.

El análisis comparativo muestra que, si bien la mayoría de los países registró un incremento en la proporción de recursos destinados a actividades sostenibles, dicho aumento continúa siendo marginal en relación con la magnitud de las necesidades de financiamiento identificadas para cumplir los compromisos climáticos y ambientales. Además, parte de este incremento responde a la ampliación metodológica realizada en esta edición, que incorporó los rubros de conservación de océanos y transporte sostenible, lo cual permitió capturar un espectro más amplio de asignaciones presupuestarias con impacto positivo en la transición sostenible.

Panamá, Perú y Chile concentran los aumentos más significativos. En Panamá, la proporción pasó de 0.11% a 2.58%, es decir, un incremento de 2.4 puntos porcentuales, lo que constituye la asignación más alta observada en todas las ediciones previas, que usualmente se ubicaban alrededor del 0.10%. Perú presentó un aumento de 0.85% a 2.91% —equivalente a 2.1 puntos porcentuales— superando ampliamente su mayor nivel previo registrado en 2020 (1.90%). Por su parte, Chile incrementó su proporción de 0.32% a 2.23%, un aumento de



1.91 puntos porcentuales, con lo cual esta edición marca su asignación más elevada desde que se aplica la medición, frente a niveles previos que no superaban el 0.30%.

En contraste, Cuba y Costa Rica registraron disminuciones. En el caso de Cuba, la proporción descendió de 0.49% a 0.35%, una caída asociada principalmente a la ausencia de información completa para estimar la variable en su totalidad. Costa Rica redujo su asignación de 0.65% a 0.45%, lo que representó una disminución de 0.20 puntos porcentuales.

En conjunto, los hallazgos dejan claro que, pese a los avances puntuales observados en algunos países, la asignación presupuestaria destinada a actividades sostenibles continúa siendo claramente insuficiente para responder a la escala de los desafíos climáticos y de biodiversidad. Incrementar estos recursos de manera sostenida requiere fortalecer los marcos de planificación fiscal verde, mejorar la trazabilidad del gasto público con impacto ambiental y consolidar capacidades institucionales para incorporar la sostenibilidad como un eje transversal del proceso presupuestario. Una mayor inversión pública en sostenibilidad no solo resulta indispensable para cumplir compromisos internacionales, sino también para reducir riesgos climáticos, proteger la estabilidad macroeconómica y promover un modelo de desarrollo más resiliente, competitivo e inclusivo.

Análisis comparativo: Presupuestos Intensivos en Carbono

El análisis comparativo de la variable de Presupuestos Intensivos en Carbono a lo largo de las seis ediciones del índice muestra que una parte significativa de los recursos públicos en la región continúa dirigiéndose a actividades con altos niveles de emisiones. Esto refleja una estructura presupuestaria fuertemente anclada a sectores intensivos en carbono, lo que limita la capacidad de los países para reorientar el gasto hacia alternativas sostenibles y dificulta la alineación de las finanzas públicas con los objetivos climáticos y de desarrollo sostenible.

La siguiente tabla presenta la proporción que representan los Presupuestos Intensivos en Carbono en los países analizados a lo largo de las seis ediciones del índice.




Tabla 10. Participación porcentual de Presupuestos Intensivos en Carbono, 2019 - 2024

País	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Argentina	1.01	0.80	1.09	1.06	1.05	0.30
Bolivia	29.28	21.80	19.23	19.80	17.83	15.91
Brasil	2.95	2.94	0.43	0.52	0.17	1.21
Chile	0.12	0.11	0.09	0.09	0.16	0.13
Colombia	0.57	0.64	0.64	0.70	0.47	0.66
Costa Rica	0.01	0.00	6.49	6.98	16.58	15.32
Cuba	0.23	0.04	0.73	0.00	0.00	0.00
Ecuador	0.17	0.27	0.12	0.14	0.42	0.91
El Salvador	0.05	0.02	0.01	0.02	1.06	1.32
Guatemala	0.02	0.02	0.03	0.02	0.04	0.16
Honduras	0.00	0.00	0.01	0.00	0.57	0.19
Jamaica	0.13	0.00	0.00	0.01	0.04	0.04
México	11.07	11.72	15.81	15.43	10.65	8.98
Nicaragua	0.02	0.02	0.02	0.02	0.46	0.40
Panamá	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01
Paraguay	7.68	7.04	5.57	5.50	7.73	7.24
Perú	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22	0.07
República Dominicana	0.00	0.01	0.00	0.03	0.09	0.02
Trinidad y Tobago	1.72	2.27	1.99	2.04	1.77	3.04
Uruguay	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.03
Venezuela	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00


Fuente: Elaboración propia con base en documentos fiscales de los 20 países analizados, correspondientes al año 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024.

Bolivia, Costa Rica, México y Paraguay destinan la mayor proporción de sus recursos a actividades intensivas en carbono. Aunque los cuatro países registraron reducciones marginales en esta edición, continúan siendo los que presentan las estructuras de gasto más orientadas hacia sectores emisores.

En el caso de Bolivia y Costa Rica, ambos países destinaron más del 15% de sus presupuestos a este tipo de actividades. Bolivia pasó de 17.83% a 15.91%, una disminución de 1.92 puntos porcentuales, manteniéndose como el país con la proporción más alta, aunque por debajo de los niveles observados en la edición 2019, cuando alcanzó casi el 30%. Costa Rica, por su parte, redujo su proporción de 16.58% a 15.32%, una disminución de 1.26 puntos porcentuales.

En el caso de México, esta edición registró su proporción más baja de la serie, destinando 8.98% en comparación con 10.65% en la edición anterior, lo que representa una disminución de 1.67 puntos porcentuales. No obstante, en años anteriores México había asignado más del 10% de su presupuesto a estos sectores, alcanzando su punto más alto en la edición 2021 con 15.81%.


Paraguay también redujo ligeramente su asignación, pasando de 7.73% a 7.24%, una disminución de 0.5 puntos porcentuales, manteniéndose dentro del rango entre 7% y 8% registrado de forma consistente en la mayoría de las ediciones.



En contraste, Trinidad y Tobago y Brasil fueron los países que presentaron los mayores incrementos en la asignación a actividades intensivas en carbono. Trinidad y Tobago pasó de 1.77% a 3.04%, un aumento de 1.2 puntos porcentuales, mientras que Brasil pasó de 0.17% a 1.21%, es decir, 1.1 puntos porcentuales adicionales.

En conjunto, los resultados evidencian que la región continúa destinando una proporción considerable de sus recursos públicos a actividades intensivas en carbono, lo que demuestra la permanencia de patrones de gasto incompatibles con una transición acelerada hacia economías bajas en emisiones. Este escenario plantea desafíos significativos para la reconfiguración de las prioridades presupuestarias, especialmente en un contexto en el que la acción climática requiere inversiones crecientes y sostenidas.

Avanzar hacia estructuras presupuestarias más coherentes con los objetivos ambientales y climáticos implica reducir gradualmente la asignación a sectores intensivos en carbono, fortalecer los mecanismos de evaluación del gasto con enfoque climático y promover inversiones públicas que contribuyan a la resiliencia, mitigación y diversificación productiva. Para ello, será fundamental que los países adopten marcos fiscales sostenibles, mejoren la trazabilidad del gasto y desarrollen instrumentos que permitan una transición ordenada y fiscalmente viable hacia economías menos intensivas en carbono.



4. Conclusiones y Recomendaciones

4.1 Conclusiones


El análisis integral del Índice de Finanzas Sostenibles (IFS) muestra que, en los países de América Latina y el Caribe, persiste una brecha estructural entre los compromisos climáticos asumidos y la manera en que se gestiona y asigna el financiamiento público. Los resultados evidencian que los presupuestos nacionales continúan predominantemente orientados hacia actividades intensivas en carbono, mientras que los recursos destinados a sectores sostenibles siguen siendo limitados, fragmentados y con escasa capacidad para generar transformaciones de largo alcance.

A nivel regional, los ingresos intensivos en carbono superan en **11 veces** a los ingresos sostenibles, lo que confirma una dependencia fiscal profunda respecto a la explotación y comercialización de combustibles fósiles. Este patrón refleja la persistencia de un modelo extractivo que prioriza la estabilidad fiscal inmediata sobre la coherencia climática a largo plazo. La limitada generación de ingresos sostenibles, junto con la baja movilización de financiamiento climático, evidencia la ausencia de instrumentos fiscales capaces de sustituir progresivamente las rentas fósiles por fuentes de ingreso diversificadas, resilientes y alineadas con el desarrollo sostenible.

El análisis también muestra que la estructura del financiamiento climático externo se mantiene prácticamente inalterada: **92.1%** proviene de préstamos y sólo **7.9%** de subvenciones. Esta composición limita el espacio fiscal de los países, aumenta los niveles de endeudamiento y restringe la capacidad de inversión en adaptación, mitigación y protección de la naturaleza, especialmente para países de ingreso medio y alto endeudamiento.

En materia de gasto, el panorama es igualmente desafiante. Los presupuestos sostenibles representan una fracción mínima del gasto total —en la mayoría de los países, menos del 3%—, mientras que las asignaciones intensivas en carbono conservan un peso preponderante, particularmente a través de subsidios energéticos y del financiamiento a empresas estatales del sector hidrocarburos. En promedio, los presupuestos intensivos en carbono superan en **5 veces** a los sostenibles, señalando una desconexión persistente entre la planificación fiscal, la política ambiental y los compromisos climáticos, incluido el mandato del **Artículo 2.1.c del Acuerdo de París**, que establece la necesidad de alinear los flujos financieros con una trayectoria baja en emisiones.

En conjunto, los resultados del IFS evidencian brechas significativas en la capacidad institucional, fiscal y presupuestaria de la región para adoptar un modelo de finanzas públicas alineado con la sostenibilidad. Predomina todavía una arquitectura fiscal que favorece al fósil y limita la movilización de recursos hacia sectores estratégicos para la acción climática, la transición justa y la protección de la biodiversidad. Para superar estas brechas se requiere fortalecer los sistemas tributarios, mejorar la asignación del gasto, planificar con visión climática de largo plazo y reforzar los mecanismos de transparencia pública, en línea con el **Acuerdo de Escazú**, que exige garantizar el acceso a la información y la participación ciudadana en materia ambiental.



De cara a estos desafíos, el IFS ofrece una hoja de ruta para comprender las dinámicas fiscales actuales, identificar los puntos críticos donde se concentran las barreras y orientar la transformación estructural que la región necesita para alinear sus finanzas públicas con un desarrollo resiliente y bajo en emisiones. A continuación, se presentan recomendaciones organizadas en cuatro dimensiones clave: ingresos, presupuestos, planeación y transparencia.

4.2 Recomendaciones

Ingresos

- **Diversificar las fuentes de ingresos públicos.** Ampliar la base fiscal mediante impuestos ambientales, tasas por emisiones o cobros por contaminación. Esta diversificación debe buscar reducir la vulnerabilidad fiscal asociada al petróleo, gas y minería, al tiempo que genera incentivos económicos para la transición sostenible. Esta medida es esencial para avanzar hacia la coherencia con el Artículo 2.1.c, al sustituir gradualmente la dependencia de ingresos fósiles por fuentes sostenibles.
- **Modernizar los sistemas tributarios con enfoque ambiental.** Actualizar marcos legales para eliminar tratamientos preferenciales regresivos, fortalecer impuestos al carbono e incorporar tributos que desincentiven prácticas contaminantes. Esto implica también mejorar sistemas de monitoreo y cumplimiento tributario, evitando evasión y subsidios implícitos que perpetúan modelos de alto impacto ambiental.
- **Promover incentivos fiscales para la inversión sostenible.** Diseñar paquetes de estímulos —como créditos fiscales, deducción de inversiones, depreciación acelerada o reducciones temporales— dirigidos a energías renovables, transporte sostenible, eficiencia energética y economía circular. Estos incentivos deben estar vinculados a resultados verificables en reducción de emisiones o mejora ambiental.
- **Canalizar los ingresos ambientales hacia fondos sostenibles.** Asegurar que los recursos generados por instrumentos verdes se reinviertan directamente en iniciativas de mitigación, adaptación, transición energética y protección de ecosistemas. La creación o fortalecimiento de fondos climáticos nacionales permite mayor estabilidad financiera y mejora la trazabilidad del uso de los recursos.

Presupuestos

- **Reorientar el gasto hacia sectores sostenibles.** Priorizar inversiones en energía renovable, infraestructura resiliente, sistemas de alerta temprana, gestión integrada del agua, conservación de la biodiversidad y ciudades sostenibles. Esta reorientación debe formar parte de una estrategia fiscal de largo plazo que reduzca la exposición a activos y sectores en declive.
- **Adoptar presupuestos climáticos y ambientales.** Institucionalizar metodologías de clasificación, etiquetado y seguimiento del gasto público vinculado a clima y biodiversidad. Esto permite identificar gastos incoherentes, evaluar impactos y orientar recursos hacia sectores alineados con metas nacionales e internacionales.
- **Reducir gradualmente el gasto intensivo en carbono.** Eliminar de manera progresiva y transparente los subsidios a combustibles fósiles, comenzando por aquellos que no tienen justificación social o ambiental. Asimismo, fortalecer la gobernanza financiera de las empresas estatales del sector hidrocarburos para evitar que presionen el gasto público y frenen la transición energética.




Planeación

- **Integrar la sostenibilidad en la planificación fiscal y presupuestaria.** Incorporar análisis de riesgos climáticos, escenarios de transición, prospectiva energética y metas de descarbonización en las reglas y marcos fiscales. Esto fortalece la capacidad del Estado para anticipar impactos económicos y definir trayectorias de inversión coherentes.
- **Desarrollar marcos fiscales ambientales y climáticos.** Vincular los objetivos económicos con metas de adaptación, mitigación y protección de la biodiversidad, garantizando que los instrumentos fiscales contribuyan a la resiliencia económica y territorial.
- **Diseñar estrategias de financiamiento y movilización de recursos.** Integrar de manera estratégica fondos públicos, recursos de cooperación internacional, banca de desarrollo y capital privado para escalar inversiones en infraestructura verde, innovación climática y restauración de ecosistemas.
- **Fortalecer la cooperación regional.** Impulsar el intercambio de metodologías, buenas prácticas, datos y herramientas fiscales sostenibles, así como mecanismos de financiamiento climático. Un enfoque regional facilita la armonización de incentivos y aumenta el poder de negociación en foros internacionales.

Transparencia


- **Fortalecer los sistemas de información financiera pública.** Garantizar registros consistentes, accesibles y estandarizados sobre ingresos, gastos, pasivos y riesgos fiscales asociados al cambio climático. Esto responde tanto al mandato del Artículo 2.1.c como a las obligaciones de acceso a la información del Acuerdo de Escazú.
- **Integrar indicadores de desempeño ambiental en el monitoreo presupuestario.** Incorporar métricas que evalúen la contribución del gasto público a las metas climáticas y de biodiversidad. Esto permite identificar áreas críticas, corregir desviaciones y evaluar el impacto real de las inversiones sostenibles.
- **Promover la rendición de cuentas y la participación ciudadana.** Fortalecer mecanismos de participación pública, auditorías ambientales y observatorios ciudadanos de finanzas climáticas. La transparencia y la participación informada están en el corazón del Acuerdo de Escazú y constituyen herramientas para garantizar la integridad del gasto.
- **Establecer sistemas de medición, reporte y verificación (MRV).** Desarrollar MRV fiscales y presupuestarios que evalúen el grado de alineación de los flujos públicos con el Artículo 2.1.c. Esto mejora la credibilidad internacional y facilita el acceso a financiamiento climático.

En conjunto, los resultados del IFS subrayan la urgencia de redefinir la arquitectura fiscal y financiera de la región para cerrar la brecha entre los compromisos climáticos declarados y la realidad presupuestaria. La transición hacia economías bajas en carbono exige no solo ajustes incrementales, sino transformaciones estructurales en la forma en que los países generan, asignan y gestionan sus recursos públicos. Esto implica avanzar hacia políticas fiscales que eliminen progresivamente los subsidios a los combustibles fósiles, fortalezcan los instrumentos para movilizar ingresos sostenibles y garanticen procesos de planificación presupuestaria más transparentes, coherentes y alineados con la acción climática.



Este desafío se vincula directamente con el mandato del Artículo 2.1.c del Acuerdo de París, que llama a alinear los flujos financieros con trayectorias compatibles con un desarrollo resiliente y bajo en emisiones, así como con los principios del Acuerdo de Escazú, que refuerzan la importancia de la transparencia, el acceso a la información y la participación pública en la toma de decisiones ambientales. Cumplir con estos principios requiere reorientar tanto el gasto como los ingresos públicos hacia la sostenibilidad, fortalecer las capacidades institucionales para incorporar criterios climáticos en la política fiscal y establecer marcos regulatorios que faciliten decisiones consistentes con una transición justa.

El fortalecimiento de los marcos nacionales de finanzas sostenibles, junto con la consolidación de instrumentos de seguimiento, medición y evaluación como el IFS, constituye un paso fundamental para redirigir los flujos financieros hacia actividades que generen beneficios económicos, ambientales y sociales de largo plazo. Solo mediante sistemas fiscales robustos, transparentes y estratégicamente orientados será posible construir una región más resiliente, equitativa y climáticamente responsable, capaz de afrontar los riesgos de la crisis climática y aprovechar las oportunidades de una economía sostenible.



5. Fuentes de información

5.1 Fuentes de información general

African Development Bank, Asian Development Bank, Asian Infrastructure Investment Bank, Council of Europe Development Bank, European Bank for Reconstruction and Development, European Investment Bank, Inter American Development Bank, IDB Invest, Islamic Development Bank, New Development Bank, & World Bank (2024). 2023 Joint Report on Multilateral Development Banks Climate Finance. Disponible en <https://doi.org/10.18235/0013160>

Banco de Desarrollo de América Latina (CAF). “Amazonía”. Disponible en: [Amazonía](#)

Banco Mundial (BM). (2021). *Climate Change Could Force 216 Million People to Migrate Within Their Own Countries by 2050*. Recuperado de [Groundswell Report](#)

Banco Mundial. (2025). *Producto Interno Bruto (PIB) en América Latina y el Caribe*. Recuperado de [PIB \(US\\$ a precios actuales\) - Latin America & Caribbean | Data](#)

Banco Mundial. (2025). Tasa de desempleo total (% de la fuerza laboral total). Recuperado de [Desempleo, total \(% de la fuerza laboral total\) \(estimación modelada de la OIT\) | Data](#)

Climate Watch. (2025). “Greenhouse Gas (GHG) Emissions,” *Climate Watch Data*. Recuperado de [World | Total including LUCF | Greenhouse Gas \(GHG\) Emissions | Climate Watch](#)

Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO). “Programa Nacional de Restauración: Contexto”. Disponible en: [Contexto | Biodiversidad Mexicana](#)

Convención sobre la Diversidad Biológica (CDB). (2019). *The State of Biodiversity in Latin America and the Caribbean - Full Report Book*. Recuperado de [post2020-ws-2019-05-presentation-2018_americas_full_report_book_v5_pages_0-en.pdf](#)

Fondo de Inversión Climática. (2025). Latin America & the Caribbean.

Fondo Verde del Clima. (2025). Open data library.

Global Tipping Points (2025). *Global Tipping Points Report*. Recuperado de [Global Tipping Points | understanding risks & their potential impact](#)

Green Environmental Facility. (2025). Country Profiles.

Gobiernos de América Latina y el Caribe. (2025). *Documentos fiscales nacionales 2024–2025*. Ministerios de Economía y Finanzas.

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). (2025). *Intergovernmental Panel on Climate Change*. Recuperado de [IPCC — Intergovernmental Panel on Climate Change](#)

International Energy Agency. (2022). *Energy Statistics Data Browser*. IEA. Recuperado de [Energy Statistics Data Browser](#).

Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR) (2025). RAR24: La falta de inversión en prevención de desastres pone en riesgo el futuro de América Latina y el Caribe. Recuperado de: [Falta de inversión en RRD pone en riesgo América Latina y el Caribe | UNDRR](#)

OPHI y PNUD. (2024). 2024 Global Multidimensional Poverty Index (MPI): Poverty amid conflict. New York.

Organización Meteorológica Mundial (OMM, 2021). El estado del clima en América Latina y el Caribe 2020. Recuperado de [El estado del clima en América Latina y el Caribe 2020](#)

PNUD. (2024). *Índice de Pobreza Multidimensional Global (IPM) 2024*. Disponible en [2024 Global Multidimensional Poverty Index \(MPI\) | Human Development Reports](#)

PNUD. (2025). Informe Regional sobre el Desarrollo Humano 2025. Bajo Presión. Recalibrando el Futuro del desarrollo en América Latina y el Caribe . New York.

Stern, N. (2007). The Economics of Climate Change: The Stern Review. Cambridge: Cambridge University Press.

WEF. (2025). Global Gender Gap Report 2025. Insight Report June 2025. Geneva: World Economic Forum.

5.2 Fuentes de información de finanzas públicas por país

Argentina

- Presupuesto abierto Gobierno de Argentina
Disponible en: [Presupuesto Abierto | Sitio del ciudadano](#)
- Secretaría de Energía. Regalías de petróleo crudo, gas natural, GLP, gasolina y de condensado. Datos Energía
Disponible en: [Datos Energía - Regalías de Petróleo Crudo, Gas Natural, GLP, Gasolina y de Condensado](#)

Bolivia

- Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Información presupuestaria y contable. Presupuesto General del Estado 2024.
Disponible en: [Información Presupuestaria y Contable – DGSGIF](#)
- Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Presupuesto Ciudadano 2024.
Disponible en: [Presupuesto Ciudadano 2024](#)

Brasil

- Ministério do Planejamento e Orçamento. Orçamento Anual 2024 “Lei Nº 14.822, de 22 De Janeiro de 2024”. Volumen I; Volumen IV.
Disponible en: [Orçamento Anual de 2024 — Ministério do Planejamento e Orçamento](#)

Chile

- Ministerio de Hacienda - Dirección de presupuestos. Ley de Presupuestos del Sector Público año 2024. Ley Nº 21.640 publicada en el Diario Oficial el 18 de diciembre de 2023.
Disponible en: [Ley de presupuestos para el sector público](#)
- Empresa Nacional de Petróleo (ENAP). Estados Financieros 2024.
Disponible en: [Enap](#)

Colombia

- Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Portal de Transparencia Económica. Presupuesto General de la Nación.
Disponible en: [**Presupuesto General de la Nación: ingresos, gastos y distribución anual - PTE - Minhacienda**](#)

Costa Rica

- Ministerio de Hacienda. Presupuesto ordinario y extraordinario; Transparencia Presupuestaria.
Disponible en: [**Presupuesto - Ministerio de Hacienda - República de Costa Rica**](#)
- Contraloría General de la República. Refinadora Costarricense de Petróleo Sociedad Anónima (RECOPE)
Disponible en: [**Contraloría General de la República | Costa Rica**](#)

Cuba

- Gaceta Oficial de la República de Cuba correspondiente al Ministerio de Justicia. Ley 164/2023 “Del Presupuesto del Estado para el año 2024”.
Disponible en: [**Gaceta Oficial**](#)

Ecuador

- Banco Central del Ecuador. Sector Fiscal – Sector Público No Financiero.
Disponible en: [**Estadísticas de Finanzas Públicas**](#)
- Portal de Ejecución Presupuestaria correspondiente al Ministerio de Economía y Finanzas.
Disponible en: [**Ejecución Presupuestaria – Ministerio de Economía y Finanzas**](#)

El Salvador

- Portal de Transparencia Fiscal del Ministerio de Hacienda
Disponible en: [**Portal de Transparencia Fiscal de El Salvador:GASTO DEL ESTADO**](#)

Guatemala

- Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado – Ejercicio Fiscal 2024 correspondiente al Ministerio de Finanzas Públicas.
Disponible en: [**Presupuestos Aprobados**](#)

Honduras

- Portal del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República correspondiente a la Secretaría de Finanzas.
Disponible en: [**Presupuesto Aprobado 2024 – SEFIN**](#)

Jamaica

- Portal del Presupuesto de Ingreso y Egresos correspondiente al Ministerio de Hacienda y Función Pública.
Disponible en: [**Revenue Estimates – Ministry of Finance & Public Service**](#)

Disponible en: [Annual and Supplementary Estimates – Ministry of Finance & Public Service](#)

México

- Portal de Cuentas Públicas correspondiente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Disponible en: [Cuenta Pública](#)

Nicaragua

- Portal del Presupuesto General correspondiente al Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
Disponible en: [Proyecto Presupuesto General de la República 2024](#)

Panamá

- Ley 418 “Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal 2024” correspondiente al Ministerio de la Presidencia y del Ministerio de Economía y Finanzas.
Disponible en: [Gaceta Oficial Digital](#)

Paraguay

- Ley de Presupuestos correspondiente al Ministerio de Economía y Finanzas.
Disponible en: [Ley de Presupuesto | Ministerio de Economía y Finanzas](#)

Perú

- Portal de Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria correspondiente al Ministerio de Economía y Finanzas.
Disponible en: [Nota Tributaria - Ingresos Recaudados](#)
- Portal de Presupuesto correspondiente al Ministerio de Economía y Finanzas.
Disponible en: [PRESUPUESTO APROBADO AÑO 2024](#)

República Dominicana



- Portal de estadísticas de las finanzas públicas correspondiente al Ministerio de Hacienda y Economía.
Disponible en: [Estadísticas fiscales Archive - Ministerio de Hacienda](#)
- Ley de Presupuesto General del Estado 2024 correspondiente a la Dirección General de Presupuesto
Disponible en: [Presupuesto General del estado año 2024](#)

Trinidad y Tobago

- Portal del Presupuesto nacional correspondiente al Ministerios de Finanzas.
Disponible en: [Estimaciones de ingresos y gastos 2024](#)

Uruguay

- Ley 19.924: Presupuesto Nacional 2020 – 2024, correspondiente al Ministerio de Economía y finanzas.
Disponible en: [Presupuesto Nacional 2020-2024](#)

- 
- Portal de Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal correspondiente al Ministerio de economía y finanzas.
Disponible en: **Rendición de cuentas 2024**
 - Portal de la Dirección General Impositiva correspondiente al ministerio de economía y finanzas.
Disponible en: **Informe de recaudación 2024**
 - Portal del Sistema integrado de información financiera correspondiente al ministerio de economía y finanzas.
Disponible en: **Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF)**
- 



ifs25

Índice
de Finanzas
Sostenibles 2025
(datos a 2024)



gflac

GRUPO DE
FINANCIAMIENTO
CLIMÁTICO
LAC